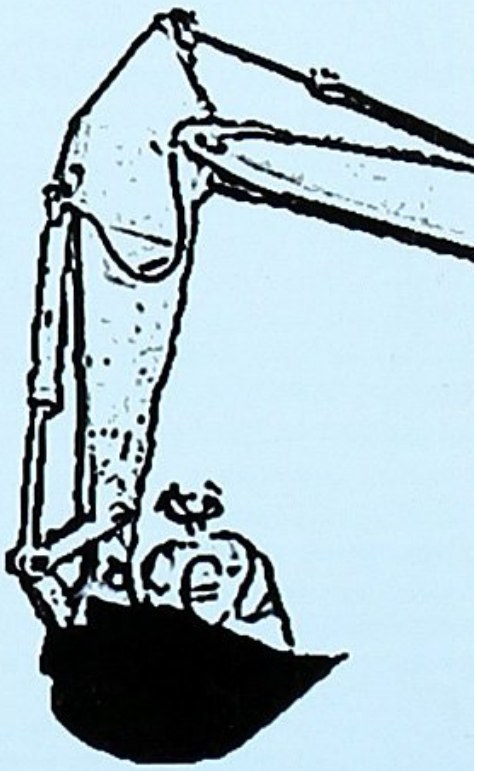
El tsunami urbanizador español y mundial

Sobre sus causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria

Ramón Fernández Durán

VIRUSEDITORIAL.NET · 2ª edición · VIRUSEDITORIAL.NET ·

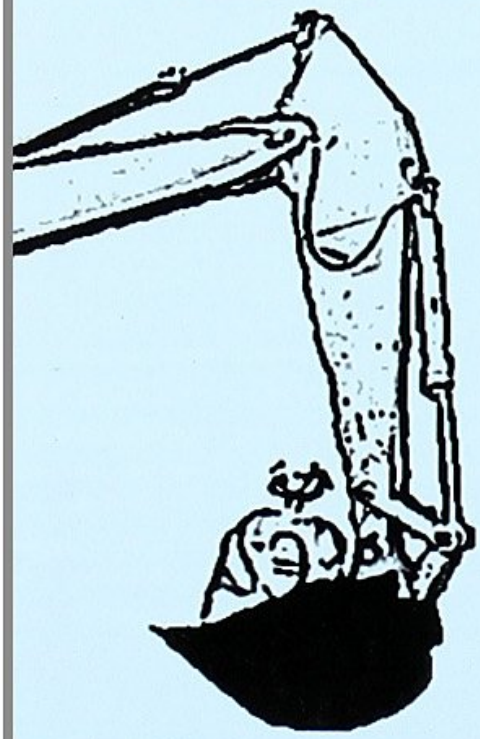


VIRUS
editorial
folletos

El Estado español se ha convertido en el país europeo con mayor número de viviendas por mil habitantes, es líder europeo también en kilómetros de autopistas y autovías, y pronto lo será en líneas de alta velocidad ferroviaria; en España se encuentran siete de las once mayores constructoras del mundo, el mayor gestor de autopistas, las mayores inmobiliarias y los mayores operadores turísticos... pero no hay ninguna empresa industrial puntera.

Una legislación especialmente lasa en cuanto a recalificaciones de terrenos, la ausencia de control sobre los precios finales —promesa de una especulación sin límites— y la entrada masiva de capital extranjero (en buena parte negro), por una coyuntura internacional favorable, junto con los bajos tipos de interés y la ausencia de viviendas de alquiler o de pisos de protección oficial han favorecido un *boom* inmobiliario que, cual «lengua de lava urbanizadora», amenaza con cubrir gran parte del territorio peninsular —en especial, aquellas zonas con mayores problemas de agua— y destruir nuestras ciudades, engullidas por la expansión y reestructuración metropolitana.

La razón de este crecimiento desaforado de la construcción de viviendas (de primera o segunda residencia), oficinas, infraestructuras de transporte o de logística, campos de golf, parques temáticos, centros comerciales, etc., es sin duda los altos beneficios que augura a las constructoras y al capital especulativo; y el «efecto riqueza» (relativo) y de creación de trabajo (pasajero) que le acompaña. Pero el resultado cierto es una acción devastadora sobre el medio, el endeudamiento por más de quince años de una cuarta parte de la población y una «burbuja inmobiliaria» que amenaza con explotar en cualquier momento, provocando una recesión sin precedentes que puede convertir el «milagro español» en una auténtica pesadilla para la mayoría.



ISBN 84-96044-74-2
9 788496 044746

VIRUS
editorial

folletos

El Tsunami urbanizador español y mundial

Sobre sus causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria

Ramón Fernández Durán

VIRUS
folletos

creative commons
LICENCIA CREATIVE COMMONS
autoría - no derivados - no comercial 1.0

- Esta licencia permite copiar, distribuir, exhibir e interpretar este texto, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Autoría-atribución: se deberá respetar la autoría del texto y de su traducción. Siempre habrá de constar el nombre del autor/a y el del traductor/a.
No comercial: no se puede utilizar este trabajo con fines comerciales.
No derivados: no se puede alterar, transformar, modificar o reconstruir este texto.
- Los términos de esta licencia deberán constar de una manera clara para cualquier uso o distribución del texto.
- Estas condiciones se podrán alterar con el permiso expreso del autor/a.

Este libro tiene una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial. Para consultar las condiciones de esta licencia se puede visitar http://creative commons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/ o enviar una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way,Stanford, California 94305, EUA.
© 2006 Virus editorial

Título original:
El Tsunami urbanizador español y mundial
Sobre sus causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria

Maquetación y cubierta:
Virus editorial

Primera edición:
junio de 2006

Edición a cargo de:
VIRUS editorial / Lallevir S.L.
C/Aurora, 23, baixos
08001 Barcelona
T./fax: 93 441 38 14
C/e: virus@pangea.org
http: www.comalter.net/virus

Impreso en:
Imprenta LUNA
Muelle de la Merced, 3, 2º izq.
48003 Bilbo
Tel.: 94 416 75 18
C/e: luna-im@teleline.es

ISBN: 84-96044-
Depósito legal: BI-

ÍNDICE

LA «GLOBALIZACIÓN» CEBA LA BURBUJA ESPECULATIVA INMOBILIARIA EN EL «NORTE» Y EL ESTALLIDO URBANO EN EL MUNDO ENTERO 7

¿Y QUÉ PASA EN «EUROPA»? 15

ESPAÑA: UN *PRESTIGE* DE CEMENTO AZOTA SUS COSTAS E INUNDA TAMBIÉN MUCHOS ENCLAVES DEL INTERIOR 23
- «Los primeros en Europa» 24
- Explosión de infraestructuras, expansión y reestructuración metropolitana, y avance imparable de la lengua de lava urbanizadora 30
- Madrid versus Barcelona: la capital se afianza en la cúspide de la jerarquía metropolitana 34
- De la expansión sin fin metropolitana a la «urbanización del campo» 40
- El dinero lo compra todo: se instaura un capitalismo mafioso 44
- Cada vez más viviendas, cada vez peor alojados y cada vez más precarios 51
- Planes faraónicos y creación de empresas de proyección europea y mundial 56
- A pesar de todo, se articula un creciente rechazo ciudadano 58

LA FRAGILIDAD E INSOSTENIBILIDAD DE ESTA DEMENCIA 63
- Esperando «atemorizados» el reventón de la burbuja inmobiliaria 63
- La metrópolis como espacio de la crisis global: la explosión del desorden 70
- Los límites ecológicos acentuarán y sentenciarán la crisis del modelo actual 73

RECONSTRUIR LA HABITABILIDAD Y LA SOCIEDAD SOBRE EL TERRITORIO 81

BIBLIOGRAFÍA 85

«Es un momento excepcional, en que todos los mercados inmobiliarios del mundo están en una fase de expansión. No es normal que todos estén en ciclo expansivo, pero ahora se está dando. Y en ese entorno de crecimiento de negocios y beneficios es difícil estar decepcionado con nada.»
Colin Dyer, presidente del grupo inmobiliario Jones Lang Lasalle (*El País*, 25-12-2005)

«Nunca habían crecido tanto los precios de la vivienda, por tanto tiempo y en tantos países (…) El boom *inmobiliario global es la mayor burbuja financiera de la historia. Cuanto mayor sea el* boom*, mayor será el eventual estallido.»*
The Economist (18-6-05)

«En el mismo momento que dejásemos de construir, se derrumbaría todo.»
El Roto, viñeta (*El País*, 7-12-05)

«Nada prohíbe la edificación en espacios protegidos.»
Francisco Marqués, Consejero de Medio Ambiente de Murcia (*La Verdad*, 15-5-05)

«Cuando las dinastías pusieron la grandeza del poder por encima de la grandeza de la vida, la delgada tierra y la tupida selva no bastaron para alimentar, tanto y tan rápidamente, las exigencias de reyes, sacerdotes, guerreros y funcionarios. Vinieron las guerras, el abandono de las tierras, la fuga a las ciudades primero, y de las ciudades después. La tierra ya no pudo mantener el poder. Cayó el poder. Permaneció la tierra. Permanecieron los hombres sin más poder que el de la tierra.»
Carlos Fuentes, «Los Cinco Soles de México»

Este texto surge a partir de un trabajo bastante más breve que saldrá en un libro colectivo sobre proyectos y alternativas agroecológicas en España (*Los pies en la tierra*, coordinado por Marc Badal y Daniel López), que publicará Virus editorial en otoño de 2006. Agradezco las conversaciones previas o los comentarios hechos a este texto por Pilarín, Iván, Dani, Marc, Víctor, Cristina, Luis, Ana, Pere, Patric, Kolya, Luis, Manolo, José Manuel, Antonio, Pedro, Charly, Isabela, Goyo, Aurora, Tom, Nino, Natalia, Rubén, Julia, Héctor, Juan Antonio, Dani, Amador, Carlos, Fernando, Nines, Juan, Paco, Pablo, Yayo y la gente de la Comisión de Urbanismo y Transporte de Ecologistas en Acción, y, cómo no, el siempre constructivo y cariñoso vistazo final de Chusa. Éste es un trabajo en gran medida colectivo, pues surge a partir del conocimiento adquirido y compartido con otr@s (much@s otr@s) que piensan que ¡hay que pararlo!

LA «GLOBALIZACIÓN» CEBA LA BURBUJA ESPECULATIVA INMOBILIARIA EN EL «NORTE» Y EL ESTALLIDO URBANO EN EL MUNDO ENTERO

El nuevo capitalismo mundial[1] se desarrolla desde los ochenta con una dimensión crecientemente financiera y especulativa, la más verdaderamente global. Tras el fuerte parón económico de los setenta y primeros ochenta (*shocks* petrolíferos, crisis del dólar, *estanflación*[2], subida brusca de los tipos de interés, estallido de la deuda externa periférica, etc.), se reinicia una nueva fase de crecimiento económico (desigual, cíclica y sobre nuevas bases) y, por supuesto, una nueva etapa de expansión urbano-metropolitana en todo el planeta. En el «Norte» se activa una vez más el crecimiento del sistema urbano superior, en especial de las principales «ciudades globales» (Nueva York, Londres, Tokio, etc.), pero su crecimiento es más espacial que demográfico, ante el agotamiento progresivo de las migraciones internas campo-ciudad (si bien su incremento de población se ve ayudado por las migraciones externas), y va acompañado de fuertes reestructuraciones internas (terciarización y reforzamiento de sus centros financieros y decisionales). En el «Sur», el estallido de sus principales metrópolis hace que éstas pasen ya a ocupar los primeros lugares mundiales en términos demográficos (México DF, São Paulo,

1. Eso que la literatura oficial ha venido a denominar «globalización», y que no es sino una brutal redefinición de todo tipo de relaciones de poder (Capital Transnacional-Capital Nacional; Capital Financiero-Capital Productivo, Capital-Estado, Capital-Trabajo, Centro-Periferias), en beneficio de las sectores más transnacionalizados y financiarizados del capital de los espacios centrales.
2. Combinación de estancamiento económico e inflación.

Lagos, Mumbai, Yakarta, etc.), que no económicos. La deslocalización industrial, los planes de ajuste estructural del FMI y el BM, el «desarrollo del subdesarrollo», las «guerras de baja intensidad» periféricas y los grupos paramilitares y, sobre todo, la desarticulación del mundo rural por la expansión del *agrobusiness* son las causas del brutal crecimiento de las megaciudades periféricas; la inmensa mayoría verdaderos vertederos de la pobreza y la marginación mundial, en gran medida femenina (Davis, 2005). A partir de los noventa se incorpora de forma irrefrenable a este proceso China (la «Fábrica del Mundo»), que se está transformando a velocidad de vértigo en una sociedad urbana, en su fachada de grandes metrópolis del Pacífico[3]. Y en el Este, tras la caída del muro, el colapso de la URSS y su aguda regresión económica, se frenan bruscamente los procesos de concentración urbana, que no se han reactivado hasta más recientemente.

Al inicio del nuevo milenio, hay unas 400 metrópolis millonarias en el mundo, unas 20 de ellas superan ya los diez millones de habitantes (tres cuartas partes de las mismas en la Periferia), y unas pocas se sitúan en el entorno de los veinte millones de habitantes. Más de la mitad de la población mundial (que alcanza 6.600 millones) habita ya en áreas urbanas[4]. Por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana supera a la rural, y este proceso va a acelerarse aún más en las próximas décadas, sobre todo en los países periféricos. Y es en éstos donde se concentran ya más de 1.000 millones de personas en suburbios gigantescos (favelas, ranchitos, villas-miseria, chabolas… distintas denominaciones para un mismo fenómeno), en general, sin servicios ni dotaciones de ningún tipo; es decir, la tercera parte de la población urbana mundial (Davis, 2005; Del Caz, Gibosos y Saravia, 2004). Entre todas las metrópolis, unas 40 se pueden considerar «ciudades globales» (Sassen, 2006), que funcionan altamente interconectadas entre sí a escala mundial, en especial sus centros financieros y decisionales, constituyendo (junto con los paraísos fiscales[5]) la trama esencial territorial del nuevo capitalismo global. Pero esta interconexión por supuesto no es simétrica, pues se establecen claras jerarquías entre las metrópolis centrales y las periféricas, que determinan geografías de poder (y concentración de riqueza) en constante redefinición, al tener que competir además todas ellas entre sí para captar los flujos mundiales de inversión. Es más, los territorios estatales dejan de ser espacios «unitarios», y sus principales regiones metropolitanas son las que se articulan con más intensidad con la economía y las finanzas globales, y se ven condicionadas asimismo por ellas. Igualmente, las nuevas dinámicas urbanas se ven influenciadas por los nuevos paradigmas tecnológicos dominantes (las tecnologías de la información y la comunicación), que permiten una creciente centralización en los procesos de toma de decisión en los espacios centrales, al tiempo que permiten una dispersión mundial en ascenso de los procesos productivos, y una creciente evasión fiscal y lavado de dinero negro en los paraísos fiscales. Todo ello coordinado por un espacio de flujos (la ciberesfera) que opera en tiempo real a escala planetaria.

Todas las metrópolis son bulímicas en cuanto al uso de materiales, energía y manufacturas, y grandes productoras de residuos e impactos territoriales y ambientales, en espe-

3. Desplazamiento de unos trescientos millones de habitantes del campo a las áreas urbano-metropolitanas en los últimos treinta años. El proceso de urbanización más rápido de la historia (Davis, 2005).

4. En 1800 el porcentaje de población urbana mundial era del 3%, de una población total de unos 1.000 millones de habitantes, y en 1900 el 15%, de una población global de 1.500 millones (Fdez Durán, 2003).

5. Los paraísos fiscales se localizan en islas o pequeños Estados en las cercanías de EE.UU. (Caribe), o en el entorno europeo, y cumplen un papel trascendental en el nuevo capitalismo global financiarizado. El mundo de las finanzas delictivas y especulativas, en gran medida inmaterial, también necesita un espacio físico para refugiarse y protegerse, y para reproducirse y proyectarse mundialmente.

cial las centrales, que son las que manifiestan las mayores «huellas ecológicas» (locales y sobre todo globales). No en vano son las que más se benefician del funcionamiento absolutamente desigual de la economía y las finanzas mundiales. Pero, a pesar de ello, todavía existe un muy considerable mundo rural, campesino e indígena, en muchos espacios de la Periferia, que está amenazado por el «desarrollo» y, sobre todo, por la expansión de la agricultura industrializada[6]. Una agricultura de exportación sin campesinos, cuya progresión en todo el planeta va a activar aún más las migraciones masivas. No sólo campo-ciudad en las Periferias, sino Periferias-Centros, en especial hacia sus metrópolis, aunque también Sur-Sur, a pesar de todas las barreras y controles. Esta nueva etapa global de crecimiento urbano se ha visto incentivada asimismo (hasta hace poco) por veinte años de petróleo barato (Fdez Durán, 2003).

Pero, recientemente, la lengua de lava urbano-metropolitana, en muchos países del «Norte», se ha visto reactivada de forma exacerbada por nuevas dinámicas financiero-especulativas. La huida masiva de capitales de los mercados bursátiles a partir de 2000 (hasta 2003), como resultado del estallido de la burbuja financiera tecnológica de la llamada *new economy*, y sobre todo la fuerte bajada de los tipos de interés del dólar que impulsó la Reserva Federal de EE.UU. a partir de entonces (hasta junio de 2004), para hacer frente al peligro de deflación que podría llevar aparejado el crack bursátil, han generado unas condiciones globales de enorme liquidez que ha

6. Esta expansión del agrobusiness se ve favorecida por las normas de la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos de libre comercio en general (TLC, MERCOSUR, UE-México, UE-Chile, etc.), que están propiciando la expansión de la agricultura de exportación, desarticulando el mundo campesino e indígena tradicional. El impacto del TLC en el campo de México ha sido verdaderamente impresionante, provocando no sólo una intensificación del crecimiento urbano en México, en concreto en el Distrito Federal, sino la duplicación de la emigración campesina hacia EE.UU., que alcanza ya los 25 millones.

buscado, y busca, dónde aposentarse. Los tipos llegaron a caer al 1% en el caso del dólar, al 2% en el del euro y a cerca del 0% para el yen. Todo ello ha propiciado una enorme capacidad de creación de dinero mundial, a partir de sus principales bastiones de emisión en divisas fuertes en el «Norte». Esta creación se ha dado a todos los niveles: dinero papel, dinero bancario y dinero financiero (Naredo, 2006a). Es un dinero que se crea en base al crédito, a la generación de deuda a todos los niveles. Deudas que se sustentan unas sobre otras, en una pirámide que (hasta ahora) parece no tener fin. Hay dinero para «todo» (aunque no para todos): para las bolsas del «Norte» (que han vuelto a crecer tras la abrupta caída del 2000-2003); para los mercados bursátiles periféricos, que han vuelto a florecer tras las crisis de los noventa; para financiar a pymes en los espacios centrales (y especular con ellas) a través del llamado «capital riesgo»; para comprar patrimonio y empresas en la Periferia; para fusiones y adquisiciones entre los grandes actores económicos y financieros mundiales, creando colosos empresariales; para los mercados de derivados fuertemente especulativos, etc.

Y, especialmente, hay una enorme cantidad de dinero que se ha orientado en muchos países del mundo, sobre todo de la OCDE, hacia el sector inmobiliario. Es hacia ese sector que está fluyendo ese chorro «sin fin» de dinero mundial, que ve cómo se multiplica su valor como si hubiera encontrado, de repente, la piedra filosofal. Se está gestando pues desde hace ya unos años una mastodóntica burbuja especulativa que ha sido caracterizada por *The Economist* (18-6-05) como el mayor proceso especulativo de la historia del capitalismo. Además, se están creando las condiciones para exacerbar aún más esta locura. Nuevos instrumentos financieros para alimentar a la bestia, para que no desfallezca, para que no estalle, por el bien de «todos». Los fondos de pensiones e inversión en expansión se orientan cada vez más hacia el sector inmobiliario. Se crean nuevos fondos inmobiliarios en los países centrales, a los que se les dan todo tipo de ventajas fiscales, para que acuda la inver-

sión a los mismos. Se titulizan las hipotecas, para permitir a los bancos financiarse y seguir dando aún más hipotecas. Etc.

Todo ello ha generado un *boom* constructor que, junto con la expansión del consumo que ha propiciado (hasta ahora) el dinero barato y el efecto riqueza de la revalorización inmobiliaria, han permitido superar la crisis de la burbuja tecnológica del año 2000 en EE.UU. (ayudado también por los acusados recortes de impuestos para los ricos y el fuerte incremento del gasto militar de Bush), generando un nuevo tirón de la economía mundial. Se ha puesto a trabajar, a demandar y a consumir (artificialmente) al territorio. Pero no sólo es construcción residencial, de oficinas o de centros comerciales (el modelo Wal Mart-Carrefour)[7]. Los fondos de pensiones y las aseguradoras están plenamente dispuestos a invertir en negocios de creación de grandes infraestructuras de transporte (vuelve con fuerza el peaje), pues buscan rentabilizar sus carteras a largo plazo. Tienen sumas ingentes de dinero que necesitan colocar de forma que garanticen réditos seguros en el tiempo. Además, estas infraestructuras son necesarias para interconectar entre sí la «fábrica global» y las metrópolis, y para alojar (e incentivar) la movilidad motorizada que genera todo este modelo productivo (mundial) y territorial, al tiempo que permiten su despliegue. Pero no sólo son necesarias grandes infraestructuras de transporte, sino que también es preciso tejer redes de oleoductos y gasoductos, de grandes tendidos eléctricos, de telecomunicaciones y de agua, en donde cada vez más participa el capital privado; eso sí, con apoyo de las instituciones financieras internacionales[8], y la ayuda y el aval de los Estados (partenariados público-privados). Esta dinámica está siendo especialmente intensa en India, China, sudeste Asiático y Pacífico, donde el

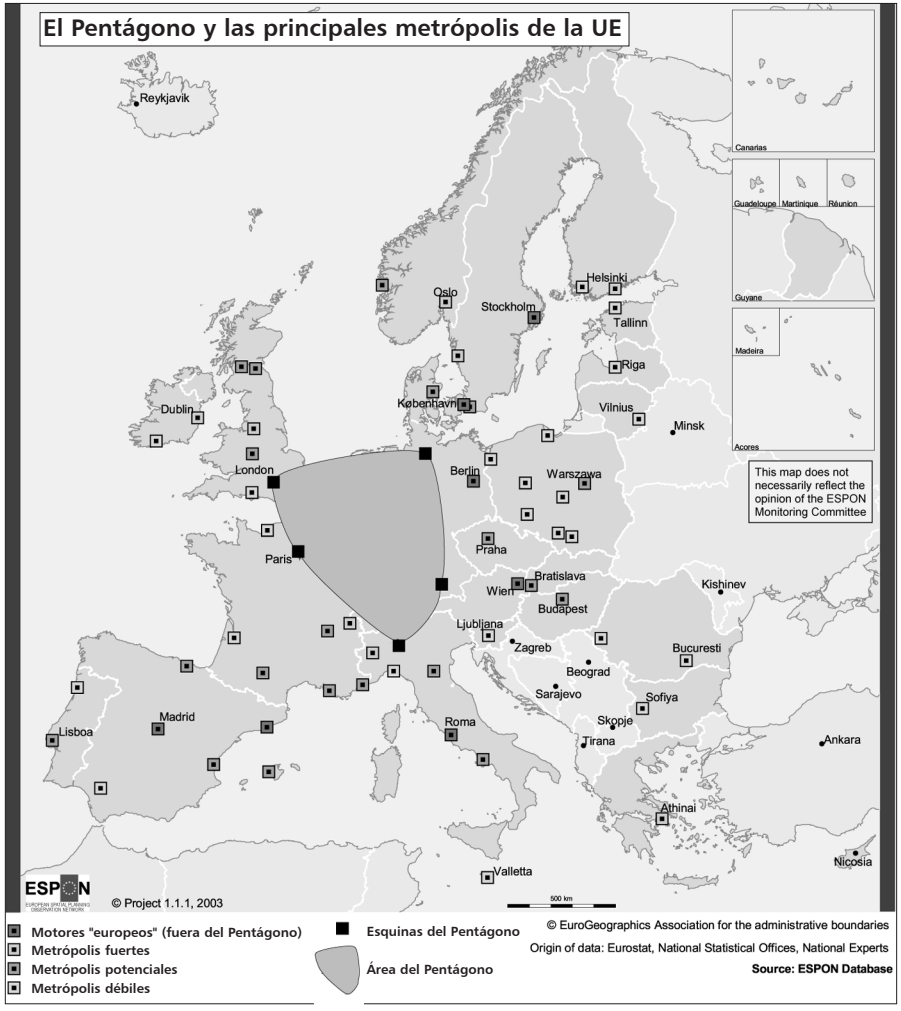
7. Wal-Mart es ya la mayor empresa transnacional del mundo, habiendo desplazado del primer puesto a General Motors.

8. Grupo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, etc.

crecimiento urbano está siendo impresionante y en donde el tráfico portuario dobla ya el de todos los puertos del Atlántico (Barreda, 2005). Y recientemente, también, se han reincorporado a esta locura constructora inmobiliaria los países extractores de petróleo (en especial de Oriente Medio: Dubai, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, etc.), debido a los ingresos excepcionales obtenidos por la fuerte subida del oro negro, después de dos décadas de crudo barato, con la edificación de edificios verdaderamente espectaculares en sus metrópolis, auténticas «catedrales en el desierto».

El capital dinero se expande sin control y se aposenta cada vez más en el territorio como soporte de valor que lo catapulta hacia el «infinito», mientras que el llamado «capital natural» no hace sino menguar. Pero este proceso afecta sobre todo a los países del «Norte», y en especial al mundo anglosajón (donde la mercantilización de la vivienda y la desregulación urbanística es mayor), con EE.UU. (hasta ahora) como uno de los epicentros de este tsunami mundial. Sin embargo, no incide en todos los países centrales por igual. En Japón, p. ej., los precios inmobiliarios caen desde hace quince años, y en Alemania se encuentran en suave regresión también desde 1997. Son las dos grandes excepciones. Por otro lado, en «Europa» la intensidad del proceso es desigual, resaltando muy específicamente la potencia del «tsunami» urbanizador en el caso de España, como veremos a continuación. En definitiva, el dinero se encuentra más seguro, en general, invirtiendo en el «suelo» de Occidente, aunque también sale a hacer sus pinitos tímidamente en los territorios periféricos, y en concreto en China (*The Economist*, 18-6-05). Pero en los espacios periféricos las operaciones inmobiliarias se concentran especialmente en sus metrópolis más significativas, y dentro de ellas sólo en determinados enclaves altamente centrales, simbólicos y rentables. El resto queda claramente fuera de estas dinámicas. En todo caso el capital dinero de los espacios centrales sale a comprar grandes extensiones de suelo rural (como en la Patagonia argentina, caso p. ej. de Benetton), pero no a arriesgar-

se en operaciones urbanas en territorios metropolitanos altamente conflictivos, donde se concentran millones de personas desposeídas, unas reducidas clases medias zarandeadas por la «globalización» y con una limitada capacidad de compra, y unas oligarquías que se atrincheran en «guetos» exclusivos superprotegidos y cada día más militarizados.



(Figura 1)

¿Y QUÉ PASA EN «EUROPA»?

En la «UE a 15» se ha ido consolidando históricamente un espacio altamente urbanizado, el llamado Pentágono (entre las metrópolis de Londres, París, Múnich, Milán y Hamburgo; ver figura 1), que representa el 18% de su superficie, donde se concentra casi la mitad de su población (41%) y la mitad de su PIB. Este proceso se vio reforzado desde la creación del Mercado Único (1986), y ha sido claramente incentivado en el continente por la moneda única desde 1999. De hecho, la existencia del euro ha fomentado aún más las llamadas euroregiones, procesos urbanos transfronterizos que se vieron favorecidos también por la creación del espacio Schengen y que son especialmente significativos en Centroeuropa (en el Benelux y sus límites con Francia y Alemania, y entre estos países, así como en las zonas de contacto de Francia con Italia); pero también se dan entre Francia y España, en las fachadas atlántica y mediterránea, así como en la frontera entre Dinamarca y Alemania. Y entre Austria, República Checa y el sur de Polonia (la imagen nocturna de «Europa» ilustra claramente estos procesos; ver figura 2). Con la ampliación a 25, el Pentágono ha afianzado su papel de centro de gravedad «europeo», funcionando como una Zona de Integración Global, una especie de megalópolis mundial, desde donde la UE se proyecta al mundo entero. En ella se ubican los principales centros de decisión comunitarios, las funciones y sedes económicas y financieras centrales de la Unión, los grandes centros de investigación y las principales universidades, etc. Y ahora en este núcleo se concentra el 32% de la población en la nueva Unión a 25, y sigue estando en él casi la mitad de su PIB. Con la ampliación, este corazón se ha vuelto aún más significativo en términos económicos y sobre todo financieros. Además, las actuales dinámicas de fusiones y concentra-

ciones europeas están reforzando aún más la potencia corporativa de este núcleo (la OPA de EON sobre Endesa es un buen ejemplo de ello). Igualmente, el Pentágono es la zona más accesible de toda la UE, su vórtice central (Espon, 2003).

(Figura 2)

Los distintos procesos de ampliación del «proyecto europeo» han favorecido y realzado históricamente al Pentágono. Las principales metrópolis europeas (Londres, París, Francfort, el Randstadt[1]…) se encuentran en su interior, aunque otras relevantes se ubican fuera de él, pero dentro de Los Quince (Berlín, Madrid, Barcelona, Estocolmo, Copenhague, Roma, Viena…), y manifiestan de nuevo muchas de ellas considerables crecimientos demográficos y sobre todo espaciales, así como fuertes reestructuraciones internas. Asimismo, es en la mayoría de Los Quince donde el *boom* inmobiliario está siendo más intenso, destacando entre todos ellos el caso de España, seguida de Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Dinamarca… (*The Economist*, 18-6-05). Y el propio Trichet, presidente del BCE, ha advertido sobre el creciente endeudamiento hipotecario. Mientras tanto, los nuevos países miembros del Este pierden población, especialmente su mundo rural, pero sus principales ciudades se van consolidando como centros metropolitanos, con un carácter por ahora más bien insular y la mayoría en caída demográfica. Lo cual contrasta con la expansión de las áreas de influencia funcional de los núcleos urbanos de Los Quince, que se desparraman sobre los territorios circundantes (conurbación difusa), conectándose y solapándose unas con otras, y creando en muchas ocasiones extensos corredores urbano-metropolitanos a lo largo de los principales ejes de transporte (en especial los viarios). Ello es especialmente así en las fachadas atlántica y mediterránea de Los Quince, donde se ubican los principales puertos que la conectan con el mundo entero (entre los que destaca Rotterdam, la boca de «Europa»)[2], produciéndose un

1. Conurbación formada por Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht, es decir, gran parte de Holanda, el territorio más urbanizado y artificializado del globo.

2. Pero destacando también Amberes, Bremen, Hamburgo, Le Havre, en el Atlántico, y Marsella, Génova y Trieste, en el Mediterráneo; otro conjunto de bocas de entrada (principalmente) y salida de la UE que se amplían de forma constante para acoger a barcos de contenedores cada vez más gigantescos.

creciente proceso de litoralización y meridionalización en la ocupación de su territorio. La dinámica de meriodinalización se ve incentivada por el clima y por el turismo en el Mediterráneo, pues es el principal destino turístico del planeta (Espon, 2003).

Se está creando, como decimos, un nuevo tipo de capitalismo (a escala global y europea) que es cada vez más «ciudad-céntrico», y en el que se reconfigura también su territorialidad, que trasciende las fronteras del Estado-nación y pasa a operar a escalas supraestatales, en nuestro caso el Mercado Único y la Eurozona (Brenner, 2003). La «ciudad» o, mejor dicho, la región metropolitana, se desacopla de las economías nacionales, que se reconfiguran a su vez para pasar a operar cada vez en unos marcos más amplios. Aunque eso sí, los Estados ponen sus recursos para resaltar sus principales metrópolis, a fin de competir mejor en el mercado europeo y mundial. Y lo mismo hace la UE para lograr que el conjunto de la Unión sea un territorio altamente competitivo. Ya no sólo se buscan economías competitivas, sino territorios competitivos. Para ello la articulación territorial y metropolitana se vuelve imperativa, y ésta se establece cada vez más a escala de toda la Unión (la Constitución Europea así lo consagra), coordinando espacialmente el conjunto de políticas sectoriales, y muy especialmente las políticas e infraestructuras de transporte, e igualmente de energía y telecomunicaciones: el sistema estratégico de redes transeuropeas. Es a esto a lo que se llama «cohesión territorial». Pero es el transporte el que cumple un papel articulador trascendental, pues la «globalización» y el Mercado Único (así como la nueva división del trabajo a escala europea) implican un progresión imparable de la movilidad motorizada (interna y externa), sobre todo viaria y aérea (el ferrocarril pierde peso relativo en el interior de la Unión), que crece a un ritmo muy superior al de la actividad económica. Y a su vez, el modelo productivo y territorial es causa y producto del estallido de la movilidad motorizada, tanto de personas como de mercancías. No en vano el transporte es el responsable del 40% de la energía que se consume en la UE (Estevan, 2005).

Pero «Europa», y especialmente su área central, el Pentágono, está cada vez más colapsada. En ese corazón asistimos desde hace años a un verdadero infarto circulatorio, que se intenta «paliar» creando aún más infraestructuras. El tráfico ha destruido hace tiempo la habitabilidad de las ciudades y ahora lo está haciendo con regiones enteras. Y en este espacio central europeo occidental, el modelo territorial y de transporte entra cada vez más en colisión con la agricultura industrializada, pues en él se ubican también las tierras más llanas, fértiles y productivas de la Unión. Pero la máquina no se puede parar, pues entonces colapsa. Y se justifica la construcción de más autopistas (aunque se fomentan también nuevas conexiones en alta velocidad ferroviaria) por la mejora «ambiental» que conlleva su ejecución, al «permitir» luchar contra la congestión. Así pues, se buscan fondos a todos los niveles para la construcción de infraestructuras: estatales, comunitarios y especialmente privados (Estevan, 2005). Pero los estatales están limitados por las exigencias del Plan de Estabilidad que condiciona el gasto público; los comunitarios por el marco presupuestario de la Unión, cada vez más exiguo, aunque se pretende destinar en el futuro gran parte de los fondos de la PAC (en fuerte replanteamiento, por los nuevos acuerdos de comercio mundial) a la creación de infraestructuras comunitarias; y es por eso que se quiere recurrir cada vez más a las nuevas formas de financiación del Banco Europeo de Inversiones, de capitales privados o a fórmulas de colaboración público-privada, apoyadas por nuevos impuestos («ecológicos») y nuevos peajes. Eso sí, todo ello con aval estatal, para socializar el posible riesgo. Esto, a su vez, encaja perfectamente con la lógica de creciente financiarización y privatización de la economía europea y mundial.

Caminamos, pues, hacia una «Europa» con unos crecientes desequilibrios territoriales, agudizados por una ampliación de la Unión que se realiza reduciendo la cuantía relativa del presupuesto comunitario. Menos dinero (proporcional) para más socios, aunque, eso sí, garantizando como sea su interco-

nexión a través de grandes infraestructuras, para que funcione el mercado y sean posibles las deslocalizaciones empresariales, con el fin de aprovechar al máximo su mano de obra barata. Es decir, se tiende hacia una dualización en ascenso del territorio, en donde las ciudades más periféricas, o excéntricas, a los ejes de «desarrollo» buscan como sea conectarse a los nodos principales a través de grandes infraestructuras (autopistas o trenes de alta velocidad), o de importantes aeropuertos y superpuertos, para no quedar marginadas del crecimiento; para no quedar como «ciudades perdedoras». Y mientras tanto, hasta eso que se denomina «desarrollo rural», que no es sino el abandono y destrucción del mundo campesino (todavía fuerte en el Este) y su dominio por el *agrobusiness*, parece que también está en la picota, o al menos en parte, pues se está utilizando por la Unión como moneda de cambio en las negociaciones de la OMC. La Comisión quiere que los países periféricos abran sus mercados a los servicios y a los productos industriales «europeos», y garanticen la protección de las inversiones privadas comunitarias, a cambio de ceder en el capítulo agrícola. Blair lo ha dejado muy claro cuando exclamaba, riéndose, en la Cumbre Europea de junio de 2005, que ¡cómo iba a ser la agricultura el futuro de Europa!

Pero asistimos también a una creciente dualización y complejización económica y social interna en las conurbaciones de la Unión, sobre todo de Los Quince. Los espacios altamente urbanizados se están diferenciando cada vez más dentro de ellos mismos en términos sociales y en niveles de renta. Determinados enclaves de las metrópolis europeas, las piezas más centrales (en términos funcionales, que no exactamente geográficos), cada vez se encuentran más ligados a las dinámicas comunitarias y globales, mientras otros experimentan un repliegue cada día más local, como resultado de su creciente marginalización. Estos procesos muchas veces se dan con una considerable cercanía, aunque sin llegar todavía a las dimensiones de las metrópolis estadounidenses, donde estas dinámicas coexisten codo con codo. Además, en las

metrópolis europeas, al contrario que en general en las estadounidenses, sectores importantes de las rentas más altas permanecen en el interior de las «ciudades», en las áreas más exclusivas de los cascos históricos, y en muchos casos amplían su presencia. Por otro lado, las conurbaciones se vuelven progresivamente territorios más multiétnicos y multiculturales, aunque eso sí, existe una tendencia paulatina hacia la segregación por comunidades de origen. Todo ello hace que surjan tendencias de creación de identidades sumamente complejas, que se entremezclan, pero también se autoexcluyen, a escala regional, de ciudad y hasta de barrio. En cuanto a la jerarquía social, convive un cosmopolistismo en ascenso de las elites y los sectores profesionales más cualificados, y una especie de «nuevo tribalismo» a nivel local, que se acentúa en los barrios más marginados y más homogéneos étnicamente. Finalmente, cabe resaltar el hecho de que la población autóctona comunitaria (de «*pedigree*») está cada día más envejecida, tiene una baja tasa de natalidad y habita cada vez de forma más individualizada (más del 50% de los hogares en Alemania son unipersonales) (Beck, 2004); mientras que la población inmigrante no comunitaria está compuesta en general por unas cohortes de edad más jóvenes, manifiesta una fertilidad mucho más alta y convive de forma más gregaria, condicionada también por sus posibilidades económicas.

ESPAÑA: UN PRESTIGE DE CEMENTO AZOTA SUS COSTAS E INUNDA TAMBIÉN MUCHOS ENCLAVES DEL INTERIOR

En el año 2000 escribíamos cómo el crecimiento español, auspiciado por la integración en el «proyecto europeo» y su apertura a la Economía Mundo, estaba generando un modelo territorial que concentraba la población y la actividad económica en el 20% de su territorio, al tiempo que abandonaba el 80% restante. Es decir, un verdadero vaciamiento de casi toda la «España interior», y muy especialmente de su mundo rural, el menos competitivo en los mercados europeos y mundiales. Un caso excepcional en cuanto a desequilibrios territoriales y poblacionales a escala de la Unión, si excluimos los países nórdicos (Suecia y Finlandia), en donde este proceso se da en especial por el clima extremo en gran parte de su territorio. Esta excepcionalidad sin duda se acrecentaba si consideramos que dentro de ese 20% del territorio se encuentra todo el arco mediterráneo, el tramo final del eje del Guadalquivir y los archipiélagos balear y canario, todos ellos en general con agudas carencias de agua, aparte del atolón demográfico madrileño, el eje del Ebro, la fachada marítima de la cornisa cantábrica y el eje atlántico gallego. Pero es hacia el primer conjunto, con serias restricciones hídricas, repetimos, hacia donde basculaba fundamentalmente el crecimiento poblacional y económico (agrícola de exportación, turístico, servicios, segundas residencias, en menor medida industrial, etc.). Y ya apuntábamos entonces la intensa ocupación del territorio que se estaba dando por el proceso urbanizador, ocasionando un fuerte impacto ambiental (Fdez Durán, 2002).

Posteriormente, los datos por satélite del Corine Land Cover del año 2000 confirmaron estas reflexiones (www.fomento.es). Pese a los márgenes de incertidumbre de esta fuente, se detec-

ta que la ocupación del territorio por el proceso urbanizador, en la década de los noventa, en suelo español fue sustancialmente más acusada que la habida a escala de toda la UE a 15, ya de por sí alta (un incremento del 6% en ese periodo), y superó el 25% del suelo previamente urbanizado (al tiempo que el bosque perdía 250.000 ha). En algunas provincias: Madrid, Valencia, Murcia y Navarra, esa nueva ocupación alcanzaba nada más y nada menos que al 50% del territorio ya urbanizado (IGN, 2004). ¡En sólo una década! Y todo eso era antes de los Cinco Años de Euforia Urbanística que hemos vivido y que todavía estamos padeciendo. ¿Qué es lo que habrá sucedido, pues, en este quinquenio en el que España ha estado en el ojo del huracán inmobiliario europeo (y mundial)?

«Los primeros en Europa»

En este último periodo se han ido batiendo anualmente todos los récords históricos en número de viviendas construidas, hasta finalmente alcanzar las 800.000 viviendas iniciadas en 2005 (la media anual en los noventa fue de 350.000)[1]. Dicha cifra supera el número de viviendas construidas en Francia, Alemania y Reino Unido juntos, que disponen de una población conjunta cuatro veces mayor aproximadamente a la española y que manifiestan asimismo una renta *per cápita* considerablemente superior (Rodríguez, 2005). Esta nueva marea constructora ha reforzado y amplificado hasta extremos difíciles de imaginar las tendencias territoriales previamente señaladas, y ha llegado a afectar asimismo hasta los lugares más recónditos del territorio español, debido a la fiebre de la segunda residencia, al llamado turismo rural y a la proliferación de estaciones de esquí y complejos turísticos asociados. El cemento no tiene mal de altura. Así pues, los espacios más calientes en cuanto a actividad constructora no han sido sólo las grandes regiones metropolitanas, que también (caso de Madrid, especialmente, como veremos luego), sino muy en concreto las áreas costeras, donde se han reproducido como setas los puertos deportivos, alcanzando la muralla de cemento no sólo al litoral marino, sino también a espacios cada vez más internos. Y la mayor presión constructora (relativa) se está manifestando precisamente allí donde menos agua hay (Murcia y Almería). La construcción junto con el consumo (auspiciado por la revalorización patrimonial creada por la burbuja inmobiliaria) se han convertido en los principales motores del crecimiento español, como en EE.UU. ¿Pero cómo es posible tamaño dislate? ¿A qué se debe esta anomalía española? ¿Se puede explicar sólo en claves internas? ¿Hay demanda doméstica para tanto cemento? ¿O es preciso incluir otros elementos externos de carácter financiero-especulativo para comprender este disparate? ¿Y qué consecuencias tendrá este tsunami cuando pase? ¿Qué paisaje nos dejará? Intentemos contestar a estas cuestiones.

España lleva 12 años de crecimiento ininterrumpido, después de la crisis del 92-93 (*shock* petrolífero por la Guerra del Golfo [1991], elevación de los tipos de interés globales, crisis del sistema monetario europeo, devaluaciones sucesivas de la peseta, etc.), que contrajo de forma importante la producción y el empleo (24% de paro en 1994). Desde entonces, hemos pasado de unos tipos hipotecarios en torno al 15% a menos del 4% en los últimos años (debido al proceso de convergencia hacia la moneda única, la entrada en el euro en 1999 y la posterior bajada de tipos de interés) (Caruana, 2005). En los últimos tres años los tipos hipotecarios se han situado por debajo de la inflación; esto es, han sido a interés

1. En la primera etapa de fuerte «desarrollismo» (60-75), durante el Franquismo, el máximo de construcción de viviendas se alcanza en 1973 con 553.000 viviendas (Rodríguez, 2005). Tras el periodo de crisis 75-85 hubo otro repunte constructor del 85 al 92 que no alcanzó ese máximo, con un fuerte auge de precios, tras el cual se produce un parón y caída relativa de precios que no se empieza a remontar hasta 1996; pero los anteriores máximos históricos, y muy en concreto el de 1973, han quedado claramente sobrepasados por el tsunami constructor y urbanizador de los últimos cinco años.

(neto) negativo. Ello ha contribuido a volver a poner en marcha el crecimiento, a crear empleo (aunque sea precario; el paro bajó al 9% en 2005) y a impulsar decisivamente la máquina inmobiliaria (interna), haciendo mucho más «accesible» la financiación hipotecaria, que además ha ido ampliando sus plazos para atraer aún a más clientes (se están dando ya créditos a 40 y hasta 50 años). Pero no podemos explicar lo sucedido exclusivamente en clave de demanda interna, en muchos casos como inversión puramente especulativa y que se ha orientado también de forma clara hacia la segunda residencia, ante el «efecto riqueza» creado por el *boom* inmobiliario para aquellos ya propietarios. Y eso que hasta la demanda residencial en los núcleos urbanos de la «España interior» se ha visto también aupada por los pagos de la PAC a agricultores en trance ya de dejar su actividad y que abandonan sus pequeños pueblos o aldeas. Es decir, la explicación del reforzamiento de la demanda interior es muy incompleta para entender lo que está sucediendo. Y ha sido la demanda exterior el factor verdaderamente determinante: ciudadanos comunitarios que compran una residencia para retirarse como pensionistas o, simplemente, como segunda (o tercera) residencia, en los lugares tradicionales de sol y playa; y sobre todo la entrada masiva de capitales internacionales hacia el sector inmobiliario español (fondos de pensiones, de inversión e inmobiliarios, y también, cómo no, grandes cantidades de «dinero negro» de particulares y mafias internacionales[2]), que contempla la vivienda y el suelo como pura inversión, pues se revaloriza de forma espectacular (con ritmos de entre el 15% y el 20% en los últimos años), y que supone casi la mitad de toda la inversión extranjera que entra en España (De la Dehesa, 2004); así como hasta la demanda

2. Un buen indicador de la tremenda cantidad de dinero negro que hay circulando en España son los billetes de 500 euros, que suponen el 25% de todos los del área de Los Doce, esto es, tres veces superior al tamaño de la economía española en la Eurozona (según las estadísticas del Banco de España).

de los sectores más solventes de la nueva población inmigrante (en los escalones más bajos del mercado), que ha experimentado un crecimiento espectacular en este periodo (casi cuatro millones de personas, cerca del 10% de la población total), incrementando sustancialmente la «población activa»[3], que se localiza prioritariamente allí donde más azota el tsunami (Malo de Molina, 2005; INE; Forcadell, 2006).

Así pues, los inversores-especuladores (foráneos e internos) y los compradores de segunda residencia son los que mantienen principalmente esta demanda de vivienda tan desaforada. En muchos casos propulsados por las posibilidades de acercarse a la oferta a través del ciberespacio. Internet está cumpliendo un papel multiplicador decisivo. España se está convirtiendo en la Gran Florida Europea, y este hecho ha impulsado una fuerte dinámica de inversiones inmobiliarias que ha arrastrado un aluvión adicional de inversión-especulación hacia el sector, ante la subida espectacular de los precios de los activos inmobiliarios que se estaba produciendo. Es un fenómeno que en gran medida se ha alimentado a sí mismo. Detallemos un poco más este proceso, que puede permitir explicar por qué ocurre esto en España, y no en Portugal, Italia o Grecia, o no con la intensidad que se está dando aquí. España es el segundo destino vacacional del mundo con 55 millones de turistas, por detrás sólo de Francia, y es el primero del planeta en turismo de sol y playa (archipiélagos balear y canario, todo el arco mediterráneo y, en menor medida, su fachada atlántica —sur—); y se está convirtiendo además, como hemos dicho, en un verdadero geriátrico turístico europeo (*El País*, 22-1-06). El crecimiento en los años noventa del número de turistas fue muy intenso, propiciado por la pérdida de otros destinos (guerras en los Balcanes, inestabilidad

3. Esto es, el trabajo vivo que participa, además, muy directa y activamente en el sector de la construcción, gran demandante de mano de obra, pero también en el servicio doméstico y en las tareas de cuidado de gran parte de las clases medias, debido a la prosperidad alcanzada en este periodo.

del Magreb, etc.), y lo mismo se puede decir respecto del aumento de los residentes comunitarios (británicos y alemanes, especialmente). El repunte de inversiones en el sector turístico, la entrada de inversiones extranjeras en segunda (o primera) residencia, la fuerte creación de infraestructuras (que luego analizaremos) y, en general, la reactivación de la actividad económica provoca un auge que tira con fuerza hacia arriba de los precios inmobiliarios. A partir de ese momento (en torno al año 2000, podríamos decir), el fenómeno se refuerza a sí mismo y se acelera aún más. Y ante el ascenso espectacular de los precios de los activos inmobiliarios, entran más inversiones especulativas, lo cual calienta aún más los precios, incentivando nuevas entradas de capital, creando una espiral que hasta ahora parece no tener fin.

Ése es quizás el hecho diferencial que permite comprender por qué se desata este proceso en España y con esta intensidad. En Portugal, p. ej., se inicia un cierto auge inmobiliario también al final de los noventa, en paralelo a la Expo de Lisboa de 2000 y la bajada de tipos que propicia la entrada en la moneda única, pero ese repunte es bastante más débil y se trunca muy pronto, debido a la debilidad en general de la economía portuguesa, lo que hace que en 2004 se construyan la mitad de viviendas que en 2000 (*El País*, 11-11-05). Es más, el país vecino está atravesando una situación verdaderamente crítica, azotado por una fuerte recesión económica y agudos problemas sociopolíticos, agravado todo ello porque no cumple el Pacto de Estabilidad (déficit público de más del 6% del PIB el año pasado), hecho que es fuertemente castigado no sólo por Bruselas, sino por los mercados financieros, acentuando a su vez aún más la crisis. Esta situación contrasta fuertemente con la de España, con la que comparte el espacio ibérico y que es miembro también del euro. Y este contraste se acentúa todavía más cuando se observa que España junto con Finlandia son los dos únicos países del euro con superávit fiscal. Son los dos modelos de éxito económico-fiscal de la UE: uno basado en el «ladrillo» y la especulación, y el otro en Nokia y la I+D+i[4]. Sí, el superávit fiscal alcanzado en 2005 por España no es posible de entender sin contemplar la fuerte actividad económica que conlleva en nuestro caso el sector de la construcción (el de mayor dimensión en toda la UE), la enorme dimensión del sector inmobiliario, la entrada masiva de capitales externos (por el momento, pero que ya está flexionando claramente a la baja), el «efecto riqueza» que todo ello lleva aparejado y la fuerte capacidad de consumo consiguiente.

En el caso italiano el hecho de tener una deuda pública que alcanza casi el 110% del PIB, la mayor de la zona euro[5], es una losa que hace que los capitales extranjeros rehuyan adentrarse de forma importante en ese territorio, por la falta clara de perspectivas rentables y por la prima de riesgo que supone su deuda pública, lo que es una de las causas del crecimiento cero que atraviesa. Además, Italia incumple el Pacto de Estabilidad (4% del PIB de déficit público), y el gobierno se ve obligado a recortar el gasto público para hacerle frente. En cambio España, al calor de esta situación excepcional, ha logrado rebajar más de veinte puntos su deuda pública estatal (está ahora en el 43%), lo que le ha ayudado a conseguir un superávit fiscal, al tiempo que ha estado creciendo en estos últimos cinco años entre dos y tres veces por encima de la media de la UE, impulsado también por el gasto público a todos los niveles. Un verdadero círculo «virtuoso» (hasta el presente) (Eurostat, 2006). Y en Grecia la situación económica atraviesa también una situación muy delicada, con un muy alto nivel de deuda pública (105% del PIB), parecido a Italia, consecuencia en gran parte del fuerte endeudamiento en que incurrió el país heleno con ocasión de las inversiones realizadas de cara a las últimas Olimpiadas; lo que junto con

4. El otro país de éxito económico espectacular es Irlanda, el tigre celta, pero no tiene superávit fiscal.
5. El Plan de Estabilidad penaliza cuando la deuda pública supera el 60% del PIB.

un abultado déficit fiscal (del 4,3%) detrae la entrada de capitales y es castigado también por Bruselas, siendo un freno a un fuerte crecimiento urbanizador e inmobiliario.

Explosión de infraestructuras, expansión y reestructuración metropolitana, y avance imparable de la lengua de lava urbanizadora

Pero el sector de la construcción es mucho más que el mercado de vivienda —y la ocupación espacial que promueve y altera el territorio—, aunque las nuevas tipologías residenciales (*boom* del chalet adosado) en las periferias urbanas y metropolitanas han repercutido decisivamente en la acusada ocupación espacial por parte de los nuevos desarrollos residenciales. Así, la creación de infraestructuras de transporte (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, grandes puertos, etc.) ha sido verdaderamente espectacular, impulsada por la inversión estatal en estos últimos diez-quince años, ayudada también por una entrada igualmente masiva de fondos comunitarios (fondos estructurales, de cohesión, etc.), que han supuesto anualmente en torno al 1% del PIB en el último periodo; pero que ha estado lubricada también por los créditos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y por una fuerte inversión privada en nuevas autopistas de peaje. Lo cual ha convertido a España en el país de la UE con más kilómetros de autovías y autopistas en relación a su población (Segura, 2005). Otro récord europeo. Todo ello ha sido clave para impulsar el crecimiento metropolitano y el urbano «en mancha de aceite». Y como parte de este proceso cabe señalar: la construcción de numerosos parques de oficinas, tecnológicos y empresariales en los bordes de los corazones metropolitanos (y aún más allá); la creación de más de un tercio de todos los centros comerciales existentes (casi 500), tan sólo en el último quinquenio, en las periferias de las conurbaciones (*El País*, «El Quinquenio de la Euforia» —especial—,

invierno 2005-2006); seguida de un abundante número de centros de actividades logísticas necesario para abastecer tamaño incremento de la oferta de consumo; así como grandes operaciones de parques temáticos y de ocio en los *hinterlands* de las grandes ciudades, que se han visto engrasadas y posibilitadas, en muchos casos, a partir del flujo de inversión (en infraestructura y en suelo) del sector público y de créditos de las cajas de ahorro regionales (auspiciados desde el poder político autonómico)[6]. Todas estas actuaciones han contribuido de forma avasalladora a la ocupación directa e indirecta (canteras, vertederos) del territorio, destruyendo sus ecosistemas, alterando el paisaje y desarticulando las actividades rurales que se desarrollaban en los espacios periurbanos (cercanos y lejanos), y desbordando absolutamente los marcos de planeamiento preexistentes.

En el interior de las grandes conurbaciones este terremoto también se ha manifestado con especial intensidad, provocando fuertes reestructuraciones y remodelaciones internas, incentivadas igualmente por una más que cuantiosa inversión pública en infraestructuras, sobre todo en red de metro y grandes operaciones viarias de acceso y circunvalación, cada vez más periféricas; entre todas ellas, el caso madrileño de la macrorremodelación de la M-30 es un verdadero dislate paradigmático. Las grandes constructoras de obra civil hacen su agosto, las tuneladoras no dan literalmente abasto (hay doce operando en el subsuelo madrileño), provocando desastres como el de El Carmel, en Barcelona, y el espacio público ciudadano en el interior de las «ciudades» se ve cada día más alterado, privatizado y *gentrificado*[7]. Mientras tanto, el centro his-

6. Time Warner en Madrid, Terra Mítica en Alicante, Port Aventura en Tarragona, Isla Mágica en Sevilla, etc. La mayoría con serios problemas de rentabilidad y recuperación de las inversiones públicas realizadas, aunque generan fuertes plusvalías urbanísticas privadas con recalificaciones de los espacios circundantes (Naredo, 2006 b).

7. Sustitución de la composición social popular de los barrios centrales por sectores de rentas más altas.

tórico se va convirtiendo poco a poco en un museo, que se remodela en ocasiones a golpe de reestructuraciones justificadas en nombre de grandes contenedores culturales (eje del Prado, Gugenheim, Macba, Matadero, etc.), y con el forceps paralelo de la creación de grandes aparcamientos que permiten el acceso en vehículo privado, en un proceso de disneyficación de unos centros urbanos cada día más tomados por las transnacionales (Starbucks, McDonalds, Tony Romas, etc.).

A las operaciones de cirugía urbana se suma la creación de grandes complejos y edificios singulares de las nuevas transnacionales españolas (Ciudad Bancaria del Santander, nuevas sedes de Telefónica, Endesa y Gas Natural, torre Agbar, torre Repsol, etc.), que hacen posible sus ganancias (cada día más contestadas) en América Latina; o aquellos otros macroproyectos que se hacen con presupuesto público (Ciudad de las Artes, Palacios de Ferias, de Congresos, de la Ópera o Filarmónicos, por doquier, etc.), verdaderos derroches económicos y disparates arquitectónicos que se hacen disparando con pólvora del rey. Todos ellos acompañados de la firma de grandes arquitectos internacionales, indispensables protagonistas estelares en la creación de los iconos de la nueva «ciudad-espectáculo». Los nuevos espacios simbólicos del poder. España se ha convertido en la Meca del *star system* de la arquitectura mundial, a mayor gloria de los políticos que los llaman, pues aquí parece que se pueden pagar los honorarios de vértigo que exigen, y esta costosa patología del derroche corre a cargo, eso sí, del contribuyente. Estas dinámicas constructivas se han visto favorecidas además por grandes operaciones urbanas, públicas y privadas, al calor de macroeventos internacionales, reales o quiméricos: Copa de América en Valencia, Madrid Ciudad Olímpica, la Expo del Agua en Zaragoza, Forum de las Culturas en Barcelona, etc. Estos macroeventos suponen un gran negocio para las elites locales, se venden a partir de un gran consenso político, como forma de captar inversiones internacionales y de crear «imagen de marca de ciudad» (*city marketing* a escala global); y generan además un importante patriotismo ciudadano local (mediáticamente inducido) que justifica cualquier desarrollismo y megatransformación urbana (Del Olmo, 2004). Y todo ello es factible, además, por el momento, por el endeudamiento municipal y autonómico que permite nuestra pertenencia al euro[8], y que ya ha empezado a pagar el ciudadano de a pie en forma de incrementos muy por encima de la inflación de las tarifas de los transportes públicos o de incrementos desproporcionados del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

El sector de la construcción creció en 2005 al mayor ritmo de los últimos cinco años, en una loca dinámica constructora-destructora: expansión irrefrenable urbano-metropolitana externa (o en nuevos enclaves), y fuerte destrucción-reestructuración interna, en la ciudad ya construida. España es el país de la Unión donde se ha dado una mayor destrucción de patrimonio edificado previo a 1950 (un vergonzoso primer puesto), mayor aún que Alemania, que vio arrasados gran parte de sus cascos históricos en la Segunda Guerra Mundial como resultado de los bombardeos aliados (Naredo, 2006). Después de unos años de relativa contención de la destrucción del patrimonio edificado y de avance en la protección del mismo —sobre todo en los ochenta, como resultado de la transición a la «democracia» y de la contestación y concienciación ciudadana—, el proceso remodelador de los cascos históricos se ha puesto otra vez a toda máquina (la película *En Construcción* lo reflejaba magníficamente en el caso de El Raval). Y en este orden de cosas, es curioso constatar también, p. ej., cómo —en paralelo a la construcción imparable de grandes centros comerciales periféricos (aunque también internos)— se asiste a la desaparición asimismo en ascenso de los mercados tradicionales en las áreas centrales. Las nue-

8. La comunidades autónomas suelen emitir deuda pública, y los ayuntamientos obtienen los préstamos principalmente de la banca. Todos ellos se benefician, por ahora, de los bajos tipos de interés existentes, de las facilidades de colocación de la deuda y de la actividad económica que todo ello genera.

vas catedrales del consumo (¡el lujo al alcance de todos!), el nuevo «espacio público» mercantilizado, securitizado y privatizado, se imponen sin piedad por todo el territorio, como un componente espacial determinante del nuevo modelo de crecimiento, basado en el binomio construcción-consumo y, por supuesto, en la expansión exponencial de la tarjeta de crédito. Un consumo masivo y ostentoso que es viable y se sustenta en gran medida en el trabajo semiesclavo de los países periféricos, en la desarticulación de sus territorios (extracción de recursos de todo tipo y expansión de la agricultura de exportación), en la explosión de la movilidad motorizada a todos los niveles y en el trabajo altamente precario de sus empleados.

Madrid versus Barcelona: la capital se afianza en la cúspide de la jerarquía metropolitana

La dinámica constructora-destructora-reestructuradora se ha instalado en todas las áreas urbano-metropolitanas españolas, pero quizás una de las que está alcanzando unas cotas más febriles sea Madrid, la capital del Estado. No en vano Aznar la promovió a ultranza durante sus gobiernos como principal centro económico-financiero español, a partir de la privatización de las grandes empresas y bancos públicos[9]. La nueva presidencia de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) ha estado marcada desde sus inicios por la corrupción política ligada al negocio inmobiliario-constructor; la nueva Alcaldía (Ruíz Gallardón) ha hecho de las obras faraónicas y de la remodelación interna su principal *leit motiv*; y el propio Estado ha impulsado (e impulsa) también operaciones gigantescas de infraestructuras, entre las que destaca la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, que ha costado

9. Esta dinámica empieza con Felipe González, pero no es hasta la llegada de Aznar que adquiere su dimensión más acusada.

la friolera de más de 6.000 millones de euros, es decir, como dos veces el presupuesto en su día del AVE Madrid-Sevilla. Y ya se está hablando de la necesidad de prever y preparar un nuevo aeropuerto para Madrid. La región de Madrid es toda ella una obra constante. Asimismo, proliferan las grandes operaciones urbanísticas especulativas, entre las que resalta la operación de remodelación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde se instalarán los nuevos edificios gigantes corporativos, que ha catapultado al club de fútbol de la capital al primer lugar del mundo en términos económicos. O las que posibilitan las deslocalizaciones industriales a los espacios periféricos de la región, o de comunidades limítrofes, que van acompañadas de muy jugosas plusvalías urbanísticas; las deslocalizaciones del sector servicios, privado e institucional, hacia lugares cada vez más lejanos (Ciudad de la Justicia, Ciudad de la Imagen, etc.); y otras profundas remodelaciones internas (Operación Campamento). Todas ellas con un fuerte componente especulativo.

Madrid trata de reforzarse como primera región metropolitana española, principalmente en su lucha con Barcelona, consolidando y ampliando en estos años la presencia de sedes corporativas en su tejido urbano (caso p. ej. del BBVA), para posicionarse de la mejor manera posible en la jerarquía europea y mundial de las principales metrópolis, con el fin de mejorar su competitividad y atraer inversiones foráneas. Y un elemento clave de esa competitividad es el aeropuerto y las conexiones internacionales que garantiza. El aeropuerto de Madrid mueve casi el doble de pasajeros que el de Barcelona y tiene una mayor proyección global; y supone además una parte muy importante de la economía madrileña[10]. Los grandes aeropuertos metropolitanos cumplen un papel estratégi-

10. El aeropuerto de Madrid mueve ya 42 millones de pasajeros, situándose en quinta posición a escala europea, por detrás de los de Londres (Heathrow), París (Charles De Gaulle), Francfort y Ámsterdam. En el último año ha tenido un crecimiento espectacular del 8,4% (*El País*, 21-3-06).

co decisivo, y es por eso que su control ha sido uno de los últimos escollos a salvar en la negociación del nuevo Estatuto de Cataluña. En esta pugna entre las dos principales regiones metropolitanas del Estado español, la pérdida de cualquier sede de una gran empresa se considera un paso atrás en la jerarquía, que puede poner en peligro la primacía madrileña y el potente crecimiento de los últimos años. De hecho, la región de Madrid es la principal boca de entrada de los beneficios extraídos por las empresas «españolas» que operan en América Latina[11], la gran mayoría con sede en la capital, que supusieron en 2005 más de un 5% del PIB español; beneficios que dinamizan principalmente la economía madrileña, pero que repercuten también sobre el conjunto del Estado. Las empresas transnacionales «españolas» y foráneas que operan en y desde Madrid generan una fuerte demanda de servicios de todo tipo (financieros, publicidad, ingeniería, marketing, seguros…) que fortalecen la economía madrileña. Además, Madrid es el principal centro bancario y financiero español, aparte de la sede del poder político. Éstas son las razones del porqué Madrid concentra hoy en día casi la mitad de las grandes fortunas españolas (Barbería, 2006). Pero esta primacía madrileña se ve constantemente amenazada en el nuevo marco europeo y global, pues es una ciudad de segundo rango a escala de la Unión y mucho menos a nivel mundial.

De ahí, aparte de otras razones políticas, la lucha de la Comunidad de Madrid (y del PP) contra Barcelona por no perder la sede de Endesa, ante la OPA de Gas Natural, o la reacción ante el traslado a la Ciudad Condal de la sede bursátil de

11. España, hasta 1980, no tenía prácticamente ninguna empresa de dimensión internacional. En los últimos 20 años, y especialmente en los noventa, al calor de la privatización de las grandes empresas y bancos públicos (Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria, etc.) se han desarrollado gigantes empresariales transnacionales, que han adquirido músculo internacional proyectándose sobre América Latina, en una loca carrera expansiva apoyada por el Estado (créditos FAD, CESCE, etc.). Estas transnacionales tan sólo son formalmente «españolas», pues entre el 30% y el 60% de su capital es foráneo (Barbería, 2006).

los mercados tecnológicos. Madrid se sabe metrópoli periférica en «Europa», aislada en el interior de la Península Ibérica, y quiere como sea garantizar su viabilidad y papel futuro. Y para ello está dispuesta a todo, atrayendo capitales como sea, proponiéndose como principal puente entre «Europa» y América Latina, por su papel líder en cuanto a sedes de las multinacionales «españolas» que operan allí, ofertándose como lugar privilegiado para las empresas mundiales que actúan en España, así como ofreciéndose también para captar capitales a toda costa hacia el sector inmobiliario y constructor. Una forma muy importante de mantener los flujos de inversión-especulación y la actividad económica en la Comunidad de Madrid. El crecimiento en estos últimos años de Madrid ha sido verdaderamente espectacular, incluido el crecimiento de su población (casi un millón en los últimos cinco años; ahora somos unos 6 millones), en gran medida inmigrante. El responsable de Urbanismo de la Comunidad ya habla de un Madrid de hasta 12 millones de habitantes (aunque no se sabe bien de dónde se sacarán los recursos hídricos para tamaño crecimiento) (*El País*, 10-4-06). Y para ello se ha procedido (y se está procediendo) a sucesivas modificaciones de la legislación urbanística en la región, que están haciendo posible que todo sea suelo urbanizable, salvo el especialmente protegido, que está en regresión institucional[12], con el fin de «enladrillar» la provincia de Madrid. Incluso se proyecta ahora el asalto a los lugares de más valor ambiental y, hasta ahora, más protegidos: la Sierra de Guadarrama. Eso sí, para los sectores más pudientes. Y todo ello se hace con el discurso fraudulento de que fomentando

12. La Ley del Suelo de 2001 permitía ya que el suelo no urbanizable común se pudiera declarar urbanizable, y la nueva ley en marcha va a hacer aún más fácil el paso de suelo no urbanizable protegido a urbanizable. Además, la nueva ley eximirá de la obligación de establecer suelo para viviendas protegidas a los municipios menores de 15.000 habitantes, los menos urbanizados por el momento, y posibilitará asimismo construir equipamientos (hospitales, colegios, etc.) en suelo especialmente protegido, aligerando de cargas a los futuros desarrollos urbanísticos para hacerlos aún más rentables.

más calificación de suelo se va a acabar con la «escasez de suelo» urbanizable, lo cual va a propiciar una bajada del precio de la vivienda para hacerla accesible a todos. Pero la vivienda es un bien especial, un bien raíz, y a pesar de que se califique mucho suelo ésta no bajará de precio (Naredo, 2005; Ordiguer, 2005), a no ser que acontezca un estallido de la burbuja inmobiliaria, como comentaremos más adelante.

Pero Barcelona no pierde el tiempo y le va a la zaga, aunque todavía a bastante distancia. Se retrasó además durante el gobierno de mayoría absoluta de Aznar[13], cuando Madrid afianzó la ventaja lograda paso a paso durante el Franquismo; pero las elites metropolitanas de la Ciudad Condal están creando las condiciones de financiación necesarias, a través del nuevo Estatuto de Cataluña, para poder recuperar el tiempo perdido; sobre todo ahora que empiezan a flaquear los fondos comunitarios. De esta forma, Barcelona se está reconvirtiendo rápidamente de vieja ciudad-industrial fordista en nueva ciudad de ferias y congresos, turística, de servicios, de investigación biotecnológica y especialmente logística. La metrópoli de Barcelona intenta venderse como cabeza de una euro-región que va desde Montpellier y Toulouse hasta Valencia, Zaragoza e incluso Palma de Mallorca, promoviéndose a sí misma como centro direccional de la misma y principal plataforma logística del sur del mediterráneo. Si bien esta propuesta genera rivalidades y tensiones (con Valencia claramente), Barcelona procura reinventarse como nueva macrociudad portuaria mediterránea de cara al Mercado Único «europeo» y a la economía global. El Plan Delta del Llobregat camina en esa dirección, con la ampliación del

13. En las últimas décadas, Convergència i Unió, de la mano de Jordi Pujol, siempre consiguió importantes inversiones para Cataluña, y en concreto para la región metropolitana de Barcelona, cuando el gobierno central dependía de su apoyo, y asimismo, el ayuntamiento de la Ciudad Condal siempre obtuvo favores claros de Madrid durante los gobiernos socialistas (Serra, Maragall).

aeropuerto del Prat, la creación de un superpuerto y la construcción de un macrodistrito logístico, todo ello sazonado de parques empresariales, áreas hoteleras, nuevas universidades, etc., y por supuesto de grandes infraestructuras de interconexión (incluido el nuevo AVE). Es decir, una forma de adaptar (y ampliar) el antiguo distrito industrial del Llobregat (amenazado por las dinámicas de deslocalización) a los nuevos tiempos que corren, aunque sea teniendo que desplazar el río más de 2,5 km hacia el sur, mediante un gran macroproyecto ingenieril. E internamente acomete profundas transformaciones para acomodar su territorio histórico, y su trama y patrimonio urbanos, a las nuevas demandas y funciones. En este sentido, tanto las Olimpiadas del 92 como el llamado Forum de la Culturas 2004 supusieron hitos significativos que han ayudado a alumbrar la nueva metrópoli, justificando la eliminación de antiguos distritos industriales y abriendo su nueva fachada postmoderna al mar, al tiempo que se promovían también suculentos negocios inmobiliarios. Sin embargo, Barcelona siempre ha tenido que lidiar con importantes resistencias a las transformaciones urbanas, pues sus núcleos antagonistas y su tejido ciudadano han sido en general mayores a los de Madrid (sobre todo una vez que se asienta la «democracia»), y para acallarlas ha tenido que recurrir a discursos de poder blando[14] y estrategias sofisticadas de apertura y cooptación social, aparte de a la inestimable ayuda brindada por la represión policial en casos puntuales (como sucede con el importante movimiento okupa).

14. El Forum de la Culturas 2004 estaba convocado bajo el lema: «Por la paz, el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible», una estrategia mediática que intentaba ocultar un macroevento que impulsaba un fuerte proceso de remodelación urbana y que fue ampliamente contestado.

De la expansión sin fin metropolitana a la «urbanización del campo»

El resto de las principales regiones metropolitanas del Estado español (Bilbao —y en general toda Euskadi—, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Vigo, etc.) intentan también como sea adaptarse y sobrevivir en el nuevo escenario de creciente «europeización-globalización», acometiendo profundas reestructuraciones internas y promoviendo nuevos desarrollos en sus periferias metropolitanas, algunos de cuyos rasgos se han esbozado ya anteriormente. Nada nuevo, es la misma dinámica ya señalada en el caso de Madrid o Barcelona, pero aplicada por metrópolis de menor dimensión y presencia internacional, intentando aprovechar y promover sus «ventajas comparativas» con el fin de ser competitivas y captar inversiones. Los procesos son similares, si bien la escala puede ser distinta, y están siendo ya analizados críticamente desde hace años, pero no los podemos sintetizar aquí por falta de espacio, pues ello desbordaría los límites y los objetivos de este texto. En todos esos núcleos urbanos se está produciendo también ese fenómeno de amplia expansión metropolitana periférica, al igual que en Madrid y en Barcelona, fomentado por las nuevas infraestructuras viarias y el fuerte incremento de la motorización, dinámica que tan bien analizaron hace ya diez años Antonio Estevan y Alfonso Sanz (1996): «Se han comparado las consecuencias del automóvil en la ciudad a los de una "bomba" lenta, cuya onda expansiva tuviera la virtud de trasladar edificios y actividades a varios kilómetros a la redonda, y cuyo principal efecto fuera el de destruir la propia esencia de las urbes: la convivencia y la comunicación de los seres humanos». Esta nueva civilización que entroniza al Dios automóvil en nuestras vidas y ciudades, y que exige un fuerte tributo de sangre al nuevo Moloch de las carreteras.

Y esta lengua de lava metropolitana se ha visto incentivada en los últimos cinco años por el nuevo tsunami urbanizador

español, que afecta en mayor o menor medida a toda la jerarquía de núcleos urbanos, y por la expansión sin precedentes del parque automovilístico en estos años. Lo cual ha reactivado un proceso cancerígeno (urbano) de crecimiento rápido, incontrolado e indiferenciado que está invadiendo y destruyendo los tejidos adyacentes (los ecosistemas periurbanos), al tiempo que ha seguido la evolución simplificadora y esquilmante de los sistemas agrarios. Pero en estos cinco últimos años ha aparecido un fenómeno nuevo por su magnitud: la «urbanización del campo» (que analizaremos más en profundidad en el siguiente apartado), que no es sino la proliferación de nuevas metástasis del proceso cancerígeno urbanizador en tejidos sanos alejados de las metrópolis (Naredo, 2004).

Pero antes de entrar a describir más detalladamente la nueva «urbanización del campo», como resultado de la expansión también sin precedentes de segundas residencias, vale la pena apuntar siquiera las consecuencias que está teniendo la proliferación de estos tejidos metropolitanos periféricos tipo «Los Ángeles» (salvando todavía las distancias), que están aprisionando la «ciudad compacta» (y socavando su interior: la «ciudad mediterránea») y provocando mutaciones trascendentales en todos los núcleos urbanos. Por un lado, la multiplicación de grandes infraestructuras viarias en las periferias metropolitanas alteran sustancialmente el paisaje tradicional de las ciudades y del territorio que las acoge, haciendo que cada vez se dedique más espacio a la movilidad motorizada: es decir, a todo lo relacionado con el transporte. Pero este espacio dedicado a la movilidad es la antítesis del espacio público urbano tradicional, que propicia el encuentro y la interrelación de los habitantes de la ciudad. Por él deambulan seres humanos crecientemente nómadas encapsulados en sus vehículos (y camiones), principalmente varones de clase media y de mediana edad; pues la utilización del vehículo privado a pesar de la extensión de la motorización no es universal, el nivel de renta sigue marcando (aunque en menor grado) el acceso al mismo, tiene un fuerte componente de género, su

uso está claramente condicionado por la edad y de él no participa en general la población inmigrante. Esta «no ciudad» periférica que se está generando a velocidad de vértigo, plagada de «no lugares» (Augé, 1993), está arrasando toda la memoria del pasado, el paisaje cultural preexistente, los referentes identitarios de siglos, está provocando un saqueo de lo público sin parangón, y creando una mercantilización y anomia en ascenso para un ser urbano nuevo sin raíces, crecientemente solo, y dedicado al consumo y a moverse sin fin, aparte de a tener que ir a trabajar a lugares crecientemente alejados de su residencia (Amorós, 2005).

Y todo ello va prefigurando un camino directo (aunque todavía nos parezca lejano), sobre todo en las periferias metropolitanas, hacia esa pesadilla que nos ha descrito de forma magistral Mike Davis (1992) para Los Ángeles en su famosa *Ciudad de Cuarzo* y en sus reflexiones sobre la *Ecología del miedo* (Davis, 2001). Es decir, un nuevo paisaje urbano marcado por la arquitectura y las tipologías urbanas del *apartheid* social y la videovigilancia, en donde: se produce una regresión total del espacio público, que inhibe cualquier tipo de participación (el «ágora» ciudadano simplemente no existe), se desarrolla una guerra civil de baja intensidad, el espacio se organiza en base al miedo (a los otros), se instala una verdadera histeria social por la seguridad, se da una creciente presencia y fiscalización policial, interviene la violencia de clase como instrumento al servicio de la construcción de la «ciudad», se organiza de forma sistemática la depredación de la naturaleza, se acrecienta el acoso contra cualquier disidencia, se produce un aumento de la polarización social, se enseñorea el inmenso poder de los promotores inmobiliarios, se van desmantelando los servicios públicos y va reinando cada vez más el mercado puro y duro, se imponen grandes maquinarias discursivas al servicio de la legitimación de los proyectos de control y explotación social, se establece una creciente criminalización de la miseria y un verdadero estado de sitio para los inmigrantes (Delgado, 2004). Y no sólo eso, en una «no ciudad» así (que tan bien ha retratado

la película *Crash*) se recrudecen los mecanismos de opresión patriarcal, la urbe se vuelve cada vez más agresiva para las mujeres (y los niños y los mayores), el espacio se organiza en contra de las consideraciones de reproducción social y de las necesarias tareas de cuidado, las nuevas «calles» (inexistentes como espacio público) se transforman en un espacio crecientemente inhóspito y amenazante, y las tensiones interétnicas e interculturales se convierten en el pan nuestro de cada día.

Igualmente, los centros urbanos caminan a pasos agigantados hacia procesos parecidos, aunque todavía conserven una vida ciudadana de la que carecen las periferias metropolitanas. A la mercantilización, turistización y museificación creciente de la ciudad tradicional, ya mencionada, se unen las nuevas estrategias del poder para acabar con lo que queda del espacio público ciudadano no sometido a la lógica del mercado, ensayando nuevas políticas de orden ciudadano y otras directamente represivas. No en vano el centro de la ciudad es todavía el espacio por excelencia de expresión del conflicto político-social. Bajo la excusa de nuevas ordenanzas cívicas, con el fin de recuperar la ciudad para la gente «decente», se está impulsando la «tolerancia cero» contra la prostitución y el gamberrismo en las calles, al tiempo que se están instalando otras medidas de excepción urbana (guerra a la venta ambulante, a la mendicidad, a los sin techo, a los carteles y murales de entidades ciudadanas, etc.). Las nuevas medidas de lucha «antiterrorista» a escala de la UE —y aquí en España van en la misma dirección— contemplan el control exhaustivo de los lugares públicos y barrios «sensibles» con la presencia permanente de policía pública y sobre todo privada, acompañada de videovigilancia generalizada. De esta forma, el control de la población se está haciendo crecientemente exhaustivo, complementando esa capacidad de seguimiento en el futuro mediante la capacidad de poder ubicar en todo momento a los individuos (y a sus vehículos) vía satélite. El nuevo DNI con chip electrónico y controles biométricos incluidos lo posibilitará. El recorte de libertades y la pérdida

de derechos civiles y políticos son crecientes, pero hasta ahora estas restricciones no han llegado en general al debate público, pues está siendo bastante subrepticio.

Pero volvamos al tsunami urbanizador, tras este breve rastreo por el previsible futuro de los nuevos espacios urbanos que se están configurando, y abordemos eso que hemos denominado la «urbanización del campo».

El dinero lo compra todo: se instaura un capitalismo mafioso

El frenesí constructor se ha visto auspiciado a escala estatal también por la desregulación urbanística a todos los niveles, y por el hecho paralelo de que hay mucha gente que se ve también beneficiada o favorecida (directa o indirectamente) por esta fiebre del cemento y la especulación, aunque sean también multitud los damnificados. Pero éstos no tienen voz, o no está articulada, o no lo suficientemente. Sobre todo la «madre naturaleza», que sufre calladamente todas estas perturbaciones. De esta forma, las medidas liberalizadoras de suelo que se iniciaron en los noventa, se han visto aún más intensificadas con el cambio de siglo, para eliminar restricciones al mercado y posibilitar las recalificaciones urbanísticas sin freno. Esto ha sido especialmente así a partir de la Ley del Suelo estatal de 1998, que ha llegado a ser conocida como la «ley del todo urbanizable» (sobre todo por las posibilidades que brindaba de calificar el suelo rústico sin especial protección), y que diversas comunidades autónomas han desregulado aún mucho más (o están en proceso de hacerlo). Es este nuevo marco legislativo el que permite una «urbanización del campo» sin control. Lo cual ha hecho que podamos decir que el planeamiento territorial y urbanístico haya pasado en general a mejor vida. Es el fin del planeamiento como un acto político colectivo, mínimamente pautado y controlado (a distancia) por la ciudadanía.

La posibilidad de promoción indiscriminada de urbanización del suelo rústico al margen de los planes de ordenación, y, sobre todo, la clasificación del suelo independiente del mismo (convenios urbanísticos, PAIs[15], etc.), ha agilizado hasta extremos insospechados el negocio urbanístico, que consiste en comprar el territorio por hectáreas y venderlo por metros cuadrados. La ganancia principal está en la gestión del suelo, en el paso del suelo rústico al suelo urbano, mediante la compra barata, recalificación y venta, con rentabilidades sencillamente fabulosas. Y estos «planes» urbanísticos se sacan adelante gobierne quien gobierne y con alianzas contranatura. Es el dinero, los chorros de dinero, mejor dicho, los que ponen en marcha todo el proceso, que se intenta llevar a cabo y se consigue, caiga quien caiga, provocando el cambio de gobierno municipal (o regional) si es preciso (mediante tránsfugas comprados por promotores) (Arribas, 2006). La corrupción política por el fabuloso negocio inmobiliario se está convirtiendo en algo generalizado (Marbella, Madrid, Camas, etc., etc., etc.). Además, los ayuntamientos están utilizando el patrimonio municipal de suelo que consiguen con los nuevos desarrollos urbanísticos para financiarse, vendiéndolo como forma de solucionar sus problemas de tesorería y ampliar su capacidad de actuación (obras de todo tipo), pero sacrificando el derecho a la vivienda de sus ciudadanos más desprotegidos; aunque también se ven tentados a ello por la deficiente sistema de financiación de las entidades locales[16]. Y los propios par-

15. Los PAIs (Planes de Actuación Integrada) son una figura urbanística creada por la Ley del Suelo de 1994 en el País Valenciano, que permiten la actuación del llamado «agente urbanizador», que más adelante se menciona. Esta figura está siendo copiada por diversas legislaciones urbanísticas autonómicas, y ahora en la Comunidad de Madrid se quiere dar un paso más e instituir también el «agente rehabilitador», para acometer sin trabas macroproyectos de remodelación urbana interna de la ciudad.

16. La supresión del IAE (impuesto de actividades económicas) que impulsó el PP con fines electorales, de cara a captar el voto de ciertas clases medias, les privó de una importante vía de financiación.

tidos políticos también nutren sus cajas con el maná irregular proveniente del «ladrillo».

Donde esta fiebre urbanizadora y recalificadora de suelo ha adquirido una mayor temperatura, aún más patológica si cabe, ha sido en el litoral valenciano y en Murcia, seguida de la provincia de Málaga (en donde destaca Marbella) y, más recientemente, de otras partes del litoral andaluz (Almería, Cádiz, Huelva), que hasta no hace mucho habían quedado bastante al margen de la marea inmobiliaria. Pero la aguda calentura urbanística está llegando ya hasta Galicia y el Cantábrico[17]. De cualquier forma, en el caso valenciano los abusos urbanísticos han logrado adquirir tal notoriedad que el Parlamento Europeo ha pedido una moratoria urbanística en el territorio de la comunidad y la modificación de su legislación urbanística. La figura del «agente urbanizador» que contempla la Ley del Suelo valenciana está permitiendo impactantes nuevos desarrollos urbanísticos, que se llevan a cabo sin respetar siquiera la propiedad privada, impulsados por grandes operadores inmobiliarios en connivencia, en muchos casos, con el propio gobierno regional. La protesta («Abusos urbanísticos NO») ante estos desmanes de ciudadanos comunitarios (más de 15.000), que habían comprado su residencia para retirarse a esas tierras y que, de repente, se veían expropiados por las nuevas actuaciones, es la que ha hecho que este nuevo escándalo llegue a Bruselas, que ha tratado este tema en el mismísimo pleno del Parlamento Europeo.

Pero quizás sea en Murcia donde el desmadre urbanístico es comparativamente mayor, el desgobierno regional más acusado, pues los nuevos desarrollos ni siquiera respetan los espacios protegidos por la propia Comunidad (ver cita de inicio de este texto), que está arrasando con ellos. Se ha llegado a tal

17. En la costa gallega se prevé medio millón de nuevas viviendas para los próximos diez años (Estevez, 2006). Y en todo el litoral Cantábrico (Asturias, Cantabria, Euskadi) la excitación constructora también es muy fuerte, si bien no adquiere por el momento la intensidad del arco mediterráneo.

situación que, por así decir, la «lechuga» (la reina indiscutible de la transformación territorial murciana de los ochenta y noventa) no puede competir ya ante el avance imparable del «ladrillo». Y el agua asignada para riego (cada vez más escasa) se destina a nuevos desarrollos urbanísticos, acompañados de sus correspondientes campos de golf (los famosos *resorts*, denominación orientada a seducir la demanda extranjera). Nuevos desarrollos cada día más segregados de la trama urbana territorial previa (son éstos los ejemplos más genuinos de la «urbanización del campo») y homogéneos según nacionalidades de los países más ricos de la Unión. Esto crea un espacio social crecientemente desigual para una inmigración de lujo, pero que gravita también sobre unos servicios públicos externos limitados; al tiempo que los inmigrantes no comunitarios que construyen o que trabajan en estos nuevos desarrollos se almacenan en los barrios degradados y abandonados de los núcleos urbanos colindantes (Díaz Orueta, 2006). Y todo ello al grito institucional de «agua para todos», que promueve un agresivo nacionalismo hidráulico para que no se frene la máquina inmobiliaria. El gobierno estatal ya se ha visto obligado a advertir de que no habrá agua para los desmesurados desarrollos urbanísticos en marcha (más de un millón de nuevas viviendas y cien nuevos campos de golf en la Comunidad Valenciana, planes para albergar más de ocho veces más población en Murcia y Almería, etc.). En definitiva, el modelo Marina D'Or, Ciudad de Vacaciones Todo el Año, y similares reproducidos por doquier. Pero lo nuevos promotores prometen sortear dichas restricciones (es decir, los controles del dominio público hidráulico) acudiendo a la construcción de un rosario de nuevas plantas desaladoras que ellos mismos controlarían. Recientemente, el gobierno regional de Murcia ha concedido el nuevo canal autonómico de televisión a los grandes promotores inmobiliarios, y entre ellos a la inefable Polaris World (el nombre en inglés es fundamental), que ha saltado a la fama a partir de su macrooperación frustrada (por una concejala) de Alhama (pero tiene otras en marcha).

Y el propio gobierno, en una postura ambigua y esquizofrénica, ante el temor del estallido de la burbuja inmobiliaria, intenta también cabalgar el tigre urbanizador como sea, al tiempo que impulsa en parte el proceso en las áreas más calientes al promover asimismo su plan de desaladoras; plan que sustituye al trasvase del Ebro del controvertido Plan Hidrológico Nacional. Pero es fundamentalmente el PP el partido más vinculado con el negocio y la especulación inmobiliaria, el que va instaurando un nuevo tipo de capitalismo cada día más mafioso. Como dice Antonio Estevan (2005): «Se está construyendo en el País Valenciano, en Murcia, en Baleares y en ciertas zonas costeras de Andalucía una gigantesca telaraña mafiosa que llega a muchos ayuntamientos, notarios, jueces y a todos los estamentos del Estado, con la cobertura política directa del PP. Tienen ingentes cantidades de dinero negro con las cuales pueden financiar cualquier clase de sobornos, extorsiones o amenazas. Y su influencia se extiende cada vez más por todo el Estado. Parece que el urbanismo valenciano y murciano es ahora mismo, junto con las grandes constructoras madrileñas, el financiador básico del PP estatal, con la particularidad de que el urbanismo costero genera mucha mayor proporción de dinero negro y por tanto se presta mejor para financiar actuaciones ilegales. Una vez se asientan las estructuras mafiosas en un determinado territorio, son prácticamente imposibles de erradicar, y más si cuentan con una parte significativa de la población, la relacionada con la construcción y negocios conexos, que se ha enriquecido en los últimos diez años como nunca lo hubiera soñado anteriormente. Cuando se desinfle el globo urbanístico todo ese dinero negro se puede ir directamente a financiar chantajes y extorsiones generalizadas, para ir apoderándose y controlando otros sectores económicos».

En estos días, mientras termino este trabajo, ha saltado la situación en Marbella. El gobierno y la Junta de Andalucía se han visto obligados a intervenir para hacer frente a una situación de «despelote» urbanístico y municipal absolutamente

desquiciada. Gran parte de la corporación ha sido metida (por el momento) entre rejas, incluida la alcaldesa, sus bienes personales intervenidos, el Ayuntamiento ha sido disuelto, están siendo acusados gran parte de sus técnicos y la propia policía municipal, etc. Las cifras son de vértigo, más de 30.000 viviendas concedidas al margen del planeamiento, y hay un cerebro de la operación, un tal Roca, que ha amasado en unos años un botín equivalente a cerca de 400.000 millones de las antiguas pesetas, colocándose entre las primeras fortunas de España. Ahí es «ná». Y ya se están viendo las conexiones de estas dinámicas mafiosas y especulativas con lo que acontece en Murcia. Tal vez todo ello ha sido posible porque la corporación estaba en manos de un grupo «político» peculiar, el GIL (creado en su día por el esperpéntico y mafioso Jesús Gil), es decir, al margen de los partidos mayoritarios, lo que ha hecho más factible la operación de intervención de la corporación municipal, que no ha sido cuestionada por la oposición del PP y que puede traer réditos políticos a los dos grandes. Pero Marbella es sólo la punta del iceberg, hay muchas más Marbellas por todo el territorio español, prestas a estallar, sobre todo si revienta la burbuja inmobiliaria. Y si no, el tiempo dirá.

Esta «urbanización (desatada) del campo» está suponiendo también una subida generalizada del precio del suelo rústico agrícola, pues todo él puede llegar a ser urbanizable. Lo cual está suponiendo el creciente abandono de la actividad agraria ante las expectativas de negocios suculentos en el horizonte, sobre todo cuando la agricultura pierde cada vez más peso en la cadena de producción de valor. Hecho que se suma al abandono de la actividad campesina tradicional que promueve la PAC, y a la propia incapacidad para que la agricultura española (sobre todo del interior) compita en los mercados europeos y mundiales. Pero aun la más competitiva no puede competir, valga la redundancia, con las plusvalías urbanísticas potenciales. Ello está derivando en una pérdida en ascenso de soberanía alimentaria, que hasta ahora se

puede solventar sin problemas, por la capacidad de compra (en este caso de alimentos) que España tiene respecto del resto del mundo. El hecho de pertenecer al área del euro le proporciona un poder de compra acrecentado.

Pero todo esto no ha surgido por casualidad. La especificidad del caso español a escala europea tiene unos antecedentes históricos concretos, aunque se haya desmadrado claramente en los últimos años. Y como apunta el recientemente desaparecido Javier García Bellido (2005)[18], estos lodos quizás provengan del polvo de la Ley del Suelo de 1956 (la vieja Ley del Suelo franquista), que confería una edificabilidad potencial homogénea a todo el suelo rústico, aunque ésta debía concretarse y materializarse posteriormente a través de determinados actos de planeamiento y administrativos, y estaba en cualquier caso condicionada. La «especulación legalizada» en la que ahora estamos instalados (de acuerdo con la denominación que él hace), parte de la ley del 56, aunque se haya reafirmado recientemente. El marco legal urbanístico español está claramente condicionado y ligado a los intereses de la gran propiedad, precapitalista y preindustrial, con claras ventajas para los grupos terratenientes dominantes, y es una clara excepción en el panorama jurídico urbanístico europeo occidental. Y algunas reformas legislativas en marcha, en concreto la que está impulsando en la actualidad la Comunidad de Madrid, significan un paso aún más acusado en esa deriva, pues va a permitir concentrar esa edificabilidad potencial del rústico, aun del altamente protegido, en determinados enclaves, con la justificación de que se crean parques naturales (privados), exonerando además de cargas a la propiedad privada y permitiéndole a ésta dar el esquinazo tributario (en palabras de García Bellido). La «urbanización del campo» se va a poder llevar hasta los espacios en teoría protegidos. Finalmente, es preciso resaltar que la autonomía urbanística de los ayuntamientos en el Estado español no tiene parangón en toda Europa occidental, lo que también se puede aprovechar para impulsar la «especulación legalizada».

Asistimos al triste hecho de poder decir que en la actualidad una ardilla podría cruzar el espacio ibérico de grúa en grúa, sobre todo recorriendo el arco mediterráneo, cuando en tiempos del dominio romano de la península se decía que lo podía hacer brincando de árbol en árbol.

18. Sirva esta cita también como un emocionado recuerdo afectivo hacia su persona y de reconocimiento hacia la labor realizada por Javier durante tantos años.

Cada vez más viviendas, cada vez peor alojados y cada vez más precarios

Pero el que España se haya convertido en el país europeo con mayor número de viviendas por mil habitantes (¡otro récord más!), para nada quiere decir que se hayan satisfecho, o que se esté en trance de hacerlo, las necesidades sociales de este bien básico. El Estado español es líder europeo de viviendas secundarias y vacías en relación a la población (¡más medallas de oro!). El parque de viviendas, pues, está muy desigualmente repartido, y el mercado hace que, a pesar de las «facilidades» de financiación hipotecaria, una gran parte de la población haya quedado desplazada del mercado, al tiempo que la vivienda social se ha desplomado. Es más, se está produciendo una venta ilegal sin freno de los pisos protegidos, por dos y tres veces su valor. Por otra parte, el endeudamiento familiar se ha triplicado en menos de diez años, pasando del 34% de la renta disponible en 1986, y el 52% en 1997, al 105% en 2005, estando una cuarta parte de la población endeudada a más 15 años (Forcadell, 2006). El endeudamiento ha crecido en estos años a un ritmo tres o cuatro veces superior al PIB, y ha aumentado en 2005 un espectacular 27% (*El País*, 16-3-06), es decir, casi ocho veces superior al crecimiento económico. Este ritmo es sencillamente insostenible, como ha alertado hasta el gobernador del Banco de

España. Por otro lado, el mercado de alquiler ha quedado reducido a su mínima expresión (el más bajo porcentualmente en la UE[19]), con unos precios abusivos, y es crecientemente inaccesible para los sectores jóvenes, y no jóvenes, de la sociedad (Naredo, 2005; Malo de Molina, 2005). Pero veamos un poco más en detalle cómo hemos llegado hasta aquí, y qué intereses hay en juego. No ha sido de un día para otro.

A principios de los años ochenta, se crean las condiciones que permiten a la banca meterse en el mercado inmobiliario[20]. La banca va a intervenir, a partir de entonces, en la financiación a largo plazo de los productos inmobiliarios, cosa que hasta entonces hacia el Estado; y éste va a ir desapareciendo progresivamente de este sector, al tiempo que crea las condiciones fiscales (a lo largo de los ochenta) para promover la vivienda como un lugar preferente para la inversión privada; es decir, se permite y alienta la desgravación fiscal por invertir en vivienda. Pero este papel de la banca en el sector inmobiliario se ha ido ampliando desde entonces, hasta llegar al Quinquenio de la Euforia en el que la banca ha basado una gran parte de su crecimiento en el incremento exponencial de los préstamos hipotecarios. Es más, ha tenido que salir a los mercados europeos para financiarse y poder proporcionar aquí más créditos, ante la falta de ahorro y depósitos internos, en una situación absolutamente desbocada (Ordiguer, 2005). Créditos que en muchas ocasiones se proporcionan también a actores poderosos para comprar grandes paquetes de suelo (concentrando aún más la propiedad de la tierra) y poder especular con ellos, una vez recalificados, participando los mismos bancos a veces en estos procesos. Todo esto le está proporcionando a la gran banca unos beneficios espectaculares, que le están posibilitando profundizar en sus aventuras de expansión europea y mundial. Emilio Botín ha llegado a exclamar en la última junta de accionistas que «nuestro límite es el cielo», refiriéndose a los beneficios alcanzados. No es para menos.

19. La media de la UE es del 32% y en España es del 11% (Forcadell, 2006).
20. Es en los Pactos de La Moncloa, a finales de los setenta, donde se contempla este cambio, que luego se plasma en la Ley del Mercado Hipotecario de 1981 (Ordiguer, 2005).

Por otro lado, en relación a la vivienda en alquiler, es conveniente apuntar que el cambio habido en medio siglo ha sido enorme. En 1950 la vivienda en alquiler era mayoritaria como forma de alojamiento de la sociedad española. Posteriormente, es el propio Franquismo el que promueve la vivienda en propiedad como vía para integrar a una parte importante de la población, aquella que iba ganando en poder adquisitivo en los sesenta; pero también establece un marco legal para los inquilinos que defendía en gran medida los intereses de éstos. Este marco se va a ir liberalizando en los años ochenta y noventa (Decreto Boyer, nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, etc.), durante los gobiernos socialistas, sometiendo crecientemente el alquiler a la reglas del mercado, dando cada vez más facilidades al arrendador y eliminando progresivamente los derechos de los inquilinos. Además, el marco para posibilitar los desahucios se ha visto favorecido en los últimos tiempos, con la excusa de fomentar la vivienda en alquiler, que no hacía sino caer en picado hasta llegar a la situación residual de hoy en día. Un caso atípico en la Unión Europea, como decíamos, al que se une la ausencia de alquiler público. El reducido porcentaje de vivienda en alquiler no es de extrañar, pues a los altos precios del mercado se unen en la actualidad unas condiciones para acceder al mismo draconianas. Ahora, además de las mensualidades por adelantado (al propietario y a la agencia correspondiente), es preciso depositar un aval en los bancos (de seis o más meses) como garantía para el propietario. Un nuevo negocio para la banca, a costa de las condiciones de alojamiento de los ciudadanos (Ordiguer, 2005). Es por eso por lo que en los últimos años la población se ha orientado aún más hacia la compra de vivienda, sobre todo en un entorno de tipos hipotecarios bajos y plazos de devolución de los créditos muy dilatados, que rebajaba (por el momento) la mensualidad a abonar.

El actual gobierno del PSOE no ha acometido ningún cambio sustancial en este terreno, tan sólo ha seguido favoreciendo el marco de inversiones para favorecer la vivienda en alquiler, que sirve para propiciar la entrada de más capitales en el sector inmobiliario, de grandes operadores, pero no para promover y abaratar los precios de alquiler. Y la llamada Sociedad Pública de Alquiler que ha creado, con ayudas a los propietarios para alquilar; y a algunos inquilinos jóvenes para acceder al alquiler —es decir, sin tocar el mercado—, es un fantasma que no arranca ni convence, y que lo único que genera es aún más burocracia en este sector, sin bajar los precios. En las actuales circunstancias sólo cabe esperar que cuando llegue a pinchar la burbuja inmobiliaria (escenario que luego intentaremos analizar brevemente), la gran cantidad de viviendas que permanecen vacías —como inversión que se revaloriza por sí sola— salga en parte al mercado de alquiler para intentar rentabilizar el capital comprometido, posibilitando quizás una bajada del mercado de alquiler.

Todo esto hace que la vivienda se haya convertido para amplios sectores sociales, aquellos no propietarios, en un bien de lujo, y que el derecho a la vivienda, que recoge la Constitución, simplemente no exista. Es una verdadera paradoja que en momentos de auge del ciclo inmobiliario se agraven las problemáticas sociales ligadas a la vivienda. Así, en casos de crisis de las relaciones matrimoniales o de pareja, la vivienda se puede acabar convirtiendo en una verdadera cárcel de la que es difícil salir (para cualquiera de los dos —y la prole si existe—, por imposibilidad económica), lo que puede degenerar en ocasiones en violencia machista. Es triste observar cómo en estos últimos años ha habido un incremento fuerte de la violencia machista, que ha supuesto un auge del número de mujeres muertas por sus conyuges o compañeros, a pesar de la nueva legislación contra la violencia doméstica y la mejora, al respecto, de la actitud de jueces y policías. Quizás la enorme dificultad para posibilitar el

acceso a una nueva vivienda tenga también que ver con esta lacra en aumento.

Además, el apuntalamiento de este modelo basado en lo constructivo-inmobiliario, y en el consumo desaforado, está contribuyendo también a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida. Tanto los empleos en la construcción, como en el gran comercio, y especialmente en las cadenas de supermercados y *discounts* (las tiendas más baratas)[21], son cada día más precarios. Se está produciendo pues un verdadero terremoto social, con una enorme transferencia de rentas de los sectores no propietarios a los sectores propietarios de la sociedad, del trabajo al capital, cuyas consecuencias son ya palpables: unas brutales desigualdades sociales. Una consecuencia más de este nuevo capitalismo global de acumulación por desposesión en el que estamos instalados (Harvey, 2004), que llega hasta al *mobbing* para echar a inquilinos y propietarios indeseados. Lo cual provoca una dualización en ascenso entre propietarios y no propietarios. Pero su impacto será más visible en nuestras calles a medio plazo, pues provocará seguramente un fuerte auge de la población sin techo, al tiempo que se hipotecan las vidas al banco o al trabajo asalariado (cada día más precario) de sectores muy amplios de la población. El esfuerzo en anualidades de sueldo para acceder a una vivienda era en 1991 de 5 años, y en 2004 de 8,2. Todo ello está repercutiendo en un retraso muy importante en cuanto a la edad de emancipación de los jóvenes (Ordiguer, 2005). Eso por no hablar de la situación de alojamiento de los inmigrantes, que normalmente se hacinan en viviendas de alquiler para poder pagarlas, en situaciones extremas en muchos casos; se ha llegado a acuñar el término «camas calientes» para caracterizarlas (es decir, una cama que se utiliza por turnos). En definitiva, la dificultad del acceso a la vivienda y la creciente precariedad laboral están generando

21. La cadena Carrefour, la mayor del sector, controla también la red de supermercados Champion y los *discounts* Día.

unas vidas más difíciles, menos merecedoras de ser vividas y menos autónomas.

Planes faraónicos y creación de empresas de proyección europea y mundial

De cara al futuro, los planes previstos son verdaderamente mastodónticos. No es sólo que las diferentes recalificaciones urbanísticas (unos 7 millones de nuevas viviendas) puedan llegar a incrementar la población española actual en unos 25 millones de personas (caso de habitarse) (CCDT, 2006), cifra muy difícil de calcular y en constante revisión (al alza), sino que los planes de infraestructuras previstos son asimismo espectaculares. Y ésos sí están claramente definidos y se están acometiendo. Otra cosa es que se cumplan definitivamente. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es el que engloba el conjunto de planes sectoriales y contempla un horizonte de realización de unos quince años. Su horizonte es el año 2020. El PEIT plantea la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autopistas (a añadir a los más de 11.000 existentes) y 9.000 nuevos kilómetros de alta velocidad ferroviaria (a añadir a los más de 1.000 kilómetros actuales); lo que corre en paralelo con el abandono del ferrocarril convencional y la privatización del mismo. Éstos dos son sus principales capítulos, pero no los únicos, pues se proponen también importantes ampliaciones de los principales puertos (creando superpuertos)[22] y una fuerte inversión en aeropuertos, un buen número de ellos de nueva creación[23]. El plan supone una fuerte continuación y profundización del esfuerzo inversor de los

22. Algeciras, Barcelona, Valencia, Bilbao, Tarragona, Cartagena, Las Palmas, Gijón, Huelva y Santa Cruz de Tenerife.
23. Se invertirá no sólo en la ampliación de los existentes, sino en la creación de nuevos aeropuertos: Burgos, Castellón, Huesca, Murcia y Ciudad Real (este último totalmente privado).

últimos años[24], superando el ritmo de creación de infraestructuras acometido durante el periodo de Álvarez Cascos como ministro de Fomento. Todo un récord. La patronal CEOE, y en concreto el SEOPAN, que agrupa a las grandes empresas de construcción, lo ha recibido con alborozo, felicitando a la ministra Magdalena Álvarez (Segura, 2005). La ministra ha llegado a insinuar la posibilidad de dedicar el superávit fiscal alcanzado a incrementar aún más el ritmo inversor en infraestructuras. Más madera, si es posible, para consolidar esta especie de «dictadura de las constructoras». En los megaproyectos de infraestructuras, que se venden como de interés público, se subestiman conscientemente los costes, una falsificación estratégica de cara a hacerlos más vendibles a la opinión pública, y se disparan luego sistemáticamente en su proceso de ejecución, deparando beneficios espectaculares para las grandes constructoras (Aguilera, 2006).

El fortísimo ritmo inversor de los últimos años ha situado ya a España en los primeros lugares del globo en cuanto a dotación de infraestructuras viarias (el PEIT nos situará claramente a la cabeza), a pesar de las declaraciones oficiales que inciden constantemente en la «necesidad» de superar nuestro «déficit secular de infraestructuras». Esta loca dinámica ha contribuido a que 7 de las 11 mayores constructoras del mundo sean en la actualidad «españolas» (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, etc.), y a que Abertis (del grupo ACS) sea el principal operador mundial de autopistas de peaje. Y ya están también empresas «españolas» gestionando importantes aeropuertos en muchas metrópolis globales (*El País*, «Extra Infraestructuras», 12-3-06). Estos grupos surgi-

24. Más de 250.000 millones de euros, es decir, más de 40 billones de las antiguas pesetas. El 40% de la inversión prevista es extrapresupuestaria —esto es, con participación privada (peaje, peaje en la sombra, etc.), pero con aval estatal— o a través de entes parapúblicos (Adif, Aena, Puertos del Estado y Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transportes Terrestres), con créditos entre otros del Banco Europeo de Inversiones, cuya deuda no cuenta (por ahora) como deuda estatal (Segura, 2005).

dos en torno al negocio de la construcción se adentran cada vez más en un amplio abanico de servicios urbanos (recogida de basura, limpieza urbana, gestión del ciclo del agua, suministro de energía, transporte, etc.), no sólo en España, sino a nivel internacional. Lo mismo podemos decir de las grandes inmobiliarias españolas (Sacyr-Vallehermoso, Metrovacesa, Urbis, Colonial, etc.), que acaparan los principales paquetes de suelo y protagonizan las mayores transformaciones urbanísticas. Su evolución ha sido estelar y su expansión internacional también. Así, hoy en día se están posicionando como las primeras de su sector a escala europea, a través de adquisiciones de otras inmobiliarias a nivel comunitario (su gran liquidez se lo permite, y si no, consiguen una importante financiación para salir de compras por «Europa»). Todo ello ha permitido su entrada de lleno en los mercados inmobiliarios de la UE a Veinticinco. En definitiva, los grupos constructores e inmobiliarios «españoles» se han resituado perfectamente entre los primeros del mundo, y por supuesto de «Europa», en el nuevo capitalismo global; pero, eso sí, no hay ninguna empresa industrial «española» entre las primeras del planeta y de la UE (Recio, 2006)[25].

A pesar de todo, se articula un creciente rechazo ciudadano

Ante la marcha por ahora imparable del tsunami urbanizador, se están articulando en muchas zonas de la geografía española muy diversas y amplias iniciativas ciudadanas de oposición, que hasta ahora son incapaces de frenar esta sinrazón. Pero éstas están teniendo ya una considerable incidencia política y social. «Abusos urbanísticos No», «Murcia no se vende», «Compromiso con el territorio», «La Vega Baja no se

25. Tan sólo Zara se sitúa entre las de cabeza en su sector, pero cabría considerarla no como empresa industrial, sino más bien de confección.

vende», «Ni una cama más», «Salvem l'horta», «Red andaluza en defensa del territorio», «Contra la especulación y la defensa de las montañas», «Salvem Mallorca», «Salvemos el Aljarafe», «La Granada que queremos», etc., etc., son algunos de los nombres de las plataformas ciudadanas que han ido surgiendo ante estas agresiones al territorio y a la sociedad. Además de diferentes plataformas antiautovías por toda la geografía (entre las que resalta la lucha en Ibiza), así como contra los planes de alta velocidad ferroviaria (con especial fuerza en Euskadi), contra las redes de alta tensión (en concreto en Cataluña y la Comunidad Valenciana) y contra las grandes plataformas logísticas. Es decir, un creciente clamor ciudadano contra la urbanización y la especulación, que va desde las zonas de costa e insulares a las áreas de montaña o a las periferias metropolitanas. Unas más locales y otras que abarcan territorios más amplios. La respuesta ciudadana está siendo especialmente contundente en los archipiélagos balear y canario, en donde más claramente se constatan los límites territoriales y ecológicos ante este enorme ataque de cemento. En los archipiélagos las movilizaciones ciudadanas han llegado a adquirir una enorme dimensión (más de 100.000 personas contra el proyecto del superpuerto de Granadilla, en el sur de Tenerife) (Aguilera, 2006) y han tenido (y están teniendo, p. ej., en Lanzarote y Menorca) un fuerte impacto político. Y hasta los hoteleros en determinados espacios se han puesto del lado de los denunciantes, ante el temor a que el desmadre urbanístico acabe con su «gallina de los huevos de oro»: el turismo.

Recientemente, acaba de constituirse en un encuentro en Murcia una plataforma estatal denominada «Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio», como resultado de la confluencia de una parte importante de estas dinámicas opositoras desde abajo. En su declaración de constitución se denuncia que la especulación urbanística es un problema de Estado, y que nunca en la historia europea ha tenido lugar una ocupación del suelo tan extrema por su dimensión y por

su impacto, que está significando un verdadero borrado cultural de las señas de identidad de la cultura mediterránea. Marbella es España, y España es Marbella, se manifiesta. Y se proclama que se pretende unir recursos y voces para frenar esta situación. La Coordinadora exige la sustitución de la legislación urbanística existente, de «corte anglosajón» (donde todo el suelo puede ser urbanizable), por otra de «corte europeo», en el que éste es por definición «protegido», y tiene procedimientos reglados más estrictos para su planificación y urbanización. Se pide el freno de la financiación «europea» de grandes infraestructuras, que favorece el desarrollo urbanístico insostenible, y la paralización inmediata de la aprobación y construcción de *resorts* y campos de golf. Finalmente, la Coordinadora pretende solicitar una entrevista con el presidente del Gobierno y con el fiscal general de Medio Ambiente, declarándose dispuesta asimisma a interponer nuevas denuncias y recursos ante la Comisión y el Parlamento Europeos (CCDT, 2006).

La constitución de esta coordinadora estatal ciudadana es un hito enormemente significativo de la gravedad que ha adquirido el tsunami urbanizador en el Estado español, y de la concienciación, resistencia y articulación social en ascenso para intentar frenarlo, bajo el lema «¡Hay que pararlo!». Algo impensable hace unos años. Es un movimiento social nuevo que surge desde la indignación de la gente, en defensa de la cultura y la autonomía local (Calvente, 2006). Es curioso cómo muchos de los colectivos y redes del llamado movimiento antiglobalización, que tuvo un fuerte auge en el periodo 2000-2003, participan ahora activamente en las distintas plataformas de defensa del territorio, enraizándose localmente; aunque repetimos que la composición social y política de este nuevo movimiento es enormemente plural, representando a un amplio espectro ciudadano.

De cualquier forma, la creciente denuncia ciudadana choca y se ve condicionada por dos importantes muros. La indiferencia en general del grueso de la sociedad ante esta locura

urbanística y saqueo de lo público, pues una parte importante de ella se beneficia, como hemos dicho, directa o indirectamente de estos procesos. Es más, podríamos decir que la cultura de la especulación ha penetrado en casi todos los poros de la sociedad, de una u otra forma. Y el otro muro es la presión que se ejerce desde los grandes beneficiarios de los pelotazos especulativos sobre los principales denunciantes de estas agresiones territoriales (denuncias ante los juzgados —con riesgo de fuertes multas—, desprestigio a través de los medios, etc.). En ocasiones se ha llegado a calificar públicamente a los líderes de las protestas de «terroristas sociales» (Aguilera, 2006). Y esta presión adquiere a veces tintes mafiosos, para inculcar el miedo en los sectores más activos, recurriendo a la violencia física si es preciso (quema de coches, agresiones a las viviendas de los líderes ciudadanos, amenazas sobre sus familiares cercanos, etc.), lo cual retrae a mucha gente. Es difícil asumir el papel de héroe y el riesgo que ello conlleva. De todas formas, la denuncia de las consecuencias del tsunami ha llegado por fin a los grandes medios de comunicación, ante la dimensión de lo que está sucediendo, y ello está incidiendo en el cambio de la percepción social del fenómeno. Bueno, cabría mejor decir que el tratamiento del tsunami ha irrumpido en determinados medios. Así es curioso observar el despliegue que ha dedicado *El País* a lo que estaba aconteciendo en el País Valenciano, Murcia y Baleares, donde gobierna el PP, y el tratamiento de lo ocurrido en Marbella. Pero también resalta cómo el tratamiento informativo es mucho más tenue cuando el fenómeno acontece en espacios donde gobierna el PSOE. Resalta el fuerte conflicto que se originó cuando *Informe Semanal*, en TVE 1, emitió un reportaje sobre la especulación urbanística en la Comunidad Valenciana, siendo duramente contestado desde el gobierno regional, que llegó a hacer hasta un contra-reportaje. Las clientelas electorales de uno y otro partido son distintas, el PP está más próximo a los propietarios en general, y el PSOE es más proclive a captar el voto de los asalariados, aunque se disputan

también un espacio común de «centro»; y ambos están a su vez condicionados por las fuerzas económicas y financieras hegemónicas, aunque desde posiciones distintas, y manifiestan los dos un fuerte sesgo desarrollista.

Por otro lado, la respuesta ciudadana es bastante más difícil de articular ante el creciente problema de acceso a la vivienda, hecho que en general se sufre cada vez más a escala puramente individual[26]. Si bien en las principales metrópolis se han desarrollado movimientos de okupación protagonizados principalmente por sectores juveniles (más potentes en Cataluña, y en concreto en Barcelona, como hemos apuntado), que debido a la represión adoptan más recientemente un carácter menos visible (pequeñas ocupaciones), y hasta ciertos movimientos muy activos de inquilinos, como en el caso de Sevilla. Pero la okupación se ve también fuertemente perseguida y criminalizada a partir del Código Penal de los noventa, que la califica como delito en lugar de como falta. El Código Penal de la «democracia» se ha endurecido especialmente en este terreno, yendo mucho más allá que el Código Penal franquista. Un verdadero símbolo de los nuevos tiempos que corren. Como dice José Manuel Naredo, es importante hacer un seguimiento detallado de todos los que estaban en la boda de la hija de Florentino Pérez (banqueros, empresarios de toda índole, políticos, líderes sindicales, etc.), para ver hasta dónde llega la influencia de los grandes señores del nuevo capitalismo español.

En definitiva, no parece que la creciente oposición ciudadana llegue a ser capaz, por sí sola, de hacer descarrilar el tsunami urbanizador, y habrá que esperar seguramente a que el cambio de coyuntura internacional y estatal, o los propios límites ecológicos planetarios y locales, pongan fin a todo este despropósito.

26. Cuando se cierra este texto, se ha lanzado una convocatoria en ciudades de todo el Estado para denunciar la situación del problema social del acceso a la vivienda, que consiste en sentadas públicas en los centros urbanos. No sabemos lo que puede dar de sí.

LA FRAGILIDAD E INSOSTENIBILIDAD DE ESTA DEMENCIA

Esperando «atemorizados» el reventón de la burbuja inmobiliaria

A nadie se le escapa que la actual dinámica inmobiliaria y territorial, así como económica y social, es profundamente injusta e insostenible. A corto plazo, es muy factible que estalle la burbuja especulativa inmobiliaria internacional, empezando probablemente en EE.UU., y que ello tenga una aguda repercusión mundial, como han alertado los principales organismos financieros internacionales: FMI (2006), BIS (2005), etc. De hecho, los ritmos de crecimiento del sector inmobiliario ya están flexionando claramente a la baja en muchos países que se han visto particularmente afectados por el *boom* de los últimos años, incluido España. La razón es que los tipos de interés han empezado a endurecerse en todo el mundo: desde hace unos dos años, en EE.UU. (donde se ha pasado del 1%, en junio de 2004, al 4,75% en la actualidad), más tarde en el área del euro, aunque todavía de forma tímida (han saltado del 2% al 2,5%), y el Banco de Japón ya ha anunciado también que va a iniciar una subida de tipos[1], después de varios años de un interés prácticamente cero. El resto de los principales bancos centrales del mundo (del G-10), condicionados por los primeros, ya han alertado asimismo sobre el fin de los tipos de interés bajos. Todos ellos buscan quizás por esta vía un desinflamiento «ordenado» y coordinado de la mayor bur-

1. Por ahora está drenando la abundante liquidez que ha inyectado en el mercado, antes de iniciar la subida de tipos.

buja financiero-especulativa de la historia del capitalismo: el tsunami inmobiliario internacional; y también el control de otras burbujas especulativas que se han activado en los tres o cuatro últimos años por los reducidos tipos de interés alcanzados (bursátil, capital riesgo, derivados, etc.). Pero la situación está fuera de control, la han creado ellos mismos, y lo más seguro es que se produzca una corrección brusca.

Este proceso se puede ver acelerado si se precipita la crisis del dólar (en gestación en los últimos años), pues ello obligará a la Reserva Federal a subir súbitamente los tipos de interés para ayudar a financiar los agudos desequilibrios financieros y comerciales estadounidenses[2], causa de la quiebra de la fe en el billete verde (Fdez Durán, 2004). El propio FMI (2006) ha alertado al respecto. Y esta subida se verá incentivada igualmente para hacer frente al incremento de la inflación que se derivará del fin de la era del petróleo barato. El repunte de los precios del crudo en los últimos tiempos ha sido espectacular. Ya estamos instalados de lleno en una nueva etapa de petróleo caro (cercana a los 75 dólares cuando se termina de escribir este texto), máxime si nos adentramos en el escenario de *peak oil*[3]; o si se producen crisis político-militares en Oriente Medio (en concreto en Irán) o en otras áreas extractoras del «oro negro», o nuevos Katrinas; o si se recrudece la especulación financiera sobre los precios del petróleo en el mercado de derivados (lo que también está ocurriendo). A lo que se suma la subida generalizada del precio de las materias

2. Enormes déficit fiscal (agravado por la guerra de Irak) y por cuenta corriente, debido a un déficit comercial que crece de forma desbocada.

3. Es decir, el momento a partir del cuál no será posible ampliar la oferta mundial de crudo, quedando desde entonces sin cubrir una parte cada vez mayor de la demanda, pues la capacidad de extracción global tenderá a disminuir lenta pero inexorablemente, hecho que hará que el precio del petróleo suba de forma constante e irreversible. Distintos estudios indican que estamos muy cerca de ese momento, si es que no lo estamos empezando a atravesar ya (http://www.crisisenergetica.org). Y ya se habla del petróleo a más de 100 dólares.

primas (crecientemente escasas), tras unos veinte años de bajada y contención, ante la fuerte irrupción en la demanda mundial de China e India. Hecho que repercutirá también en la inflación, en la demanda e igualmente en el freno del crecimiento. Un factor más a añadir a la vulnerabilidad de un crecimiento mundial basado en la expansión del crédito a todos los niveles, créditos que se sustentan unos sobre otros. Este castillo de naipes se puede venir abajo si se frena el crecimiento global y se demuestra imposible devolver las deudas e hipotecas contraídas. El intento de desplazar en el tiempo (hacia el futuro) y amortiguar los ciclos económicos capitalistas, mediante la creación de liquidez sin freno, esta loca huida hacia delante, parece haber tocado a su fin. Todo ello puede contribuir al estallido de la abultada burbuja inmobiliaria internacional, que puede provocar una depresión-deflación planetaria. La caída del crecimiento en EE.UU. que provocaría una brusca reducción del consumo, como resultado del pinchazo de los precios de los activos inmobiliarios y de la subida de tipos de interés, tendría un fuerte impacto mundial. Además, la repercusión sobre la «economía real» será mucho mayor en caso de estallido de una burbuja inmobiliaria, que en el de una bursátil (como la del 2000-2003), como el propio FMI ha alertado y como se ha podido observar durante quince años ya en el caso de Japón. El problema es que ahora esa situación se trasladaría a escala global, con consecuencias imprevisibles (Fdez Durán, 2006).

El «milagro español», si se produce el escenario anterior, se vería afectado de lleno. Además, la subida de tipos en EE.UU. repercutiría con toda seguridad en un alza paralela de tipos por parte del BCE. Ya ha empezado a producirse, como decimos, a pesar del amplio coro de voces en contra (Comisión Europea, Consejo Europeo, OCDE, etc.), y se aventuran ya unos tipos de interés del euro en torno al 3,5% para finales de año (Forcadell, 2006), lo que incidirá fuertemente en la economía española. Y este «reducido» pronóstico puede ser mayor, repetimos, si se precipita la crisis del dólar o se

agudiza aún más la crisis del petróleo, o las dos cosas al mismo tiempo. El propio gobernador del Banco de España ha advertido de la posibilidad de «una abrupta y desordenada corrección en el futuro del mercado inmobiliario» (Caruana, 2005). El impacto de un escenario así será sin duda demoledor en el Estado español, que además manifiesta una aguda dependencia del «oro negro» —el propio FMI (2006) *dixit*— y cuya economía ha ido acumulando en los últimos años el mayor déficit por cuenta corriente con relación al PIB del mundo (más del 7% del PIB), es decir, de los más de 190 países del planeta; y que hasta ahora se ha podido financiar sin problemas debido a nuestra pertenencia al euro (Alonso, 2005) y a la entrada masiva de capitales foráneos sobre todo al sector inmobiliario[4].

Por otro lado, España está perdiendo cada vez más base productiva y competitividad a escala de la Unión (resultado también de una inflación persistentemente por encima de la media «europea»), de ahí también su abultado déficit exterior. Este déficit se podría agudizar adicionalmente si se acentúa la migración de la industria del automóvil a los países del Este, por la incapacidad de competir con los costes de su mano de obra, como ya ha empezado a ocurrir (Volkswagen en Pamplona), lo que provocaría una situación muy delicada en los núcleos urbanos que dependen de esta industria (Valladolid, Vigo, Valencia, Zaragoza, Sevilla, etc.). En algunos de ellos la dependencia es muy fuerte. La situación se podría agravar aún más si los flujos de beneficios que provienen de las transnacionales que operan en América Latina se ven bruscamente reducidos (ya hemos dicho que representan más del 5% del PIB español), como consecuencia de un empeoramiento de la situación económica de ese amplio espacio (por la subida de los tipos de interés del dólar y por

4. El propio FMI (2006) alerta sobre un déficit por cuenta corriente de más del 8% del PIB para este año.

la inestabilidad monetaria que generaría); o como consecuencia de una puesta en cuestión de las condiciones en las que operan las grandes empresas «españolas», debido a los importantes cambios sociopolíticos que están teniendo lugar al sur del Río Grande. Una verdadera rebelión contra el creciente expolio transnacional. Y a todo ello habría que sumar el inicio del cierre del grifo de los fondos comunitarios que ha empezado ya (todavía de forma suave) y se va a ir agravando hasta el año 2013, lo cual va a afectar de forma considerable a las obras públicas.

Además, el nivel que ha alcanzado el endeudamiento familiar y el encarecimiento de la vivienda puede ser ya un serio freno al crecimiento futuro. Y el parón constructor que conllevaría el estallido de la burbuja inmobiliaria podría arrastrar una brusca regresión del crecimiento, al incidir también de forma muy importante en la capacidad de consumo. Amén, de la exposición al riesgo que bancos y cajas tendrían ante la incapacidad de pago de muchos de los créditos que han concedido, y la repercusión social que ello pueda ocasionar en las rentas más débiles.

Por otra parte, la pertenencia al euro en este caso sí sería un problema para salir de una crisis de esta naturaleza, pues no existiría la posibilidad de devaluación, que permitiese poner el motor del crecimiento económico otra vez en marcha, y se entraría en una situación de depresión económica de la que sería muy difícil salir, como ha advertido el propio gobernador del Banco de España (Caruana, 2005). Algo así, como hemos visto, es lo que ha pasado en Portugal. Es decir, una crisis asimétrica dentro del área del euro; esto es, que puede afectar a un determinado territorio, en este caso España, y no a otro, o con especial intensidad en nuestro caso debido a las condiciones específicas descritas. A ello habría que añadir el brusco empeoramiento que un hecho así provocaría en la solvencia general de las empresas españolas (al margen del sector de la construcción), que se ha visto reforzada en estos años por la gestión de sus activos inmobiliarios.

España es uno de los Estados de la eurozona que más se ha «beneficiado» de la entrada en el euro (al tiempo que el ciudadano de a pie ha visto encarecerse los distintos bienes básicos). Eso sí, agravando sus desequilibrios internos hasta límites imposibles de soportar si no estuviese en la moneda única. Se podría decir que el Estado y la economía española han actuado como verdaderos gorrones dentro del área del euro. Han podido incurrir en semejante desequilibrio exterior porque todo funciona como si fuéramos una región de la eurozona, que tiene un ligero superávit comercial con el resto del mundo (gracias principalmente a Alemania y a Francia), y es por eso que se nos da crédito. El euro no podría soportar un desequilibrio comercial como el que tiene el dólar. Los mercados financieros le habrían puesto rápidamente en su sitio; es decir, se habría producido una devaluación importante del euro. Pero es España principalmente la que está erosionando esta situación en el conjunto de la eurozona, que puede llegar a estallar. De hecho, recientemente el *Financial Times* anunciaba que el BCE había hecho un ejercicio de simulación en el que se estudiaba lo que podría pasar a escala de la eurozona si se produjera una quiebra del sector inmobiliario importante o una crisis bancaria fuerte (Parker, 2006). ¿Se está pensando ya en lo que puede ocurrir en la eurozona si estalla la burbuja inmobiliaria española (y en otros países)? ¿Puede afectar la ola de choque de la quiebra previsible del sector constructor español (y de otros) a la credibilidad del euro? El tamaño de la economía española es considerable, y si se ve sacudida por una fuerte crisis, ello puede llegar a afectar al propio euro.

De hecho, la inquietud de los promotores inmobiliarios españoles empieza a ser evidente. Las ventas empiezan a dilatarse en el tiempo, las inversiones foráneas a disminuir, el crecimiento de los precios inmobiliarios a orientarse a la baja, el número de construcción de viviendas a retraerse sensiblemente, las condiciones de financiación de las operaciones urbanísticas a endurecerse (como resultado de la subida de tipos de

interés), etc. Y, además, los tímidos intentos del gobierno socialista de introducir unas mínimas correcciones en todo este desmadre (cambios en la valoración de los terrenos para todos los propietarios, tanto a efectos de expropiaciones como de suelos rústicos, limitaciones a las posibilidades de los ayuntamientos para dedicar cesiones de suelo a financiar gastos propios[5], nueva normativa de construcción de viviendas, nueva ley forestal para prevenir nuevas Terras Míticas[6], nueva regulación más estricta de los agentes inmobiliarios, etc.) están haciendo saltar también todas las alarmas. Parece que se acaba la gallina de los huevos de oro de la «especulación legalizada». Y últimamente estamos viendo cómo se ofrecen todo tipo de anzuelos, que antes no eran necesarios, para vender los productos inmobiliarios que cada vez tienen una mayor dificultad de acogida por el mercado. Ahora se regalan coches, se sortean «puras sangre», se conceden cheques de hasta 6.000 euros para gastar en centros comerciales (la división inmobiliaria de Carrefour), se regalan fines de semana en hoteles de lujo, etc., etc.; eso sí, si se compra un piso o un chalet.

Los problemas de «gobernabilidad» político-social en un escenario de esa naturaleza son evidentes. El incremento brusco del paro, la fuerte subida de unas hipotecas sobre pisos que, de repente, pueden valer mucho menos en el mercado que cuando se suscribieron, la incapacidad de pago de las rentas más bajas, la pérdida de viviendas en trance de adquisición a favor de las entidades financieras, la crisis y posible quiebra de muchas de ellas y la consiguiente necesidad de salvamento que se arbitraría por parte del Estado (no

5. Nueva Ley del Suelo en elaboración, aunque con muchos problemas para salir adelante. Las presiones deben ser enormes. Además, no parece que haya una voluntad política firme. Aparte de que hay el temor de no ir abiertamente en contra de las dinámicas del mercado, por lo que pudiera ocurrir.

6. La nueva Ley Forestal imposibilitaría durante 30 años la reclasificación de terrenos protegidos que hubiesen sufrido un incendio, lo que ha sido moneda corriente en los últimos tiempos, como p. ej. en el caso de Terra Mítica, tras arder una extensa zona de pinar mediterráneo protegido donde ahora se asienta.

se «puede dejar» quebrar al Santander, al BBVA o a La Caixa, p. ej.), que se intentaría que fuera financiada por los ciudadanos de a pie, etc. De hecho, el Banco de España ha alertado también sobre el hecho de que en España hay el doble de sucursales bancarias que la media de la UE, y esta tremenda expansión de oficinas se ha llevado a cabo a impulsos de la locomotora del crecimiento del crédito hipotecario. Lo cual puede ser un lastre adicional en costes para las entidades bancarias, si estalla la burbuja inmobiliaria. El nuevo presidente de la asociación de bancos ya ha dicho que éstos se preparen para un «cambio de ciclo» (*El País*, 24-5-06). Una situación así puede crear escenarios difícilmente manejables. Eso por no hablar de la ingobernabilidad y la «guerra civil (molar y) molecular» que se produciría por el incremento de las tensiones interétnicas, en un contexto de aguda crisis económica y social, y lucha entre los «de abajo» por un empleo escaso. Esas tensiones ya existen en la situación de «bonanza» actual, se están azuzando por determinados actores políticos, y muy probablemente se intensificarán cuando se produzca un intenso y prolongado parón económico. Un escenario «ideal» para que proliferen los grupos de extrema derecha y las posturas abiertamente racistas.

La metrópolis como espacio de la crisis global: la explosión del desorden (Fdez Durán, 1993-6)

Por otro lado, nos adentramos en una época en que se va a ver alterado de forma importante el marco de funcionamiento diario de los grandes espacios urbano-metropolitanos. No sólo en la Periferia, donde el caos y la ingobernabilidad están ya instalados en muchas de sus megaciudades, sino en las propias conurbaciones de los espacios centrales. El fin del petróleo barato va a incidir de lleno en los dos talones de Aquiles del actual modelo productivo y territorial: el transporte motorizado y la agricultura industrializada, lo cual va a

incentivar un auge importante del coste de la vida y del funcionamiento diario de las regiones metropolitanas, al tiempo que el empleo y la existencia se volverán cada día más precarios en las mismas. En los últimos años hemos empezado a ver las consecuencias que se pueden derivar de los escenarios de crisis energéticas que se avecinan. Los grandes apagones en la Costa Este de EE.UU. y Canadá, uno de los espacios más urbanizados del globo, o los acontecidos en Italia, Dinamarca o el área del Gran Londres son tan sólo un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir, y de las repercusiones económicas y sociales que se pueden derivar de estas interrupciones —que hasta ahora han sido sólo de horas—, sobre todo en las principales metrópolis de los espacios centrales que basan su dominio mundial en su papel de centros rectores decisionales del nuevo capitalismo global, transnacionalizado y financiarizado. Es preciso recordar que la UE importa del exterior del orden del 75% del petróleo que consume, y una parte importante del mismo proviene de Oriente Medio; así como el 50% del gas que utiliza, que proviene principalmente de Rusia (y del Magreb). Estos porcentajes se dispararán en los próximos años cuando se agoten las reservas de petróleo y gas del Mar del Norte. Pero en el caso español está dependencia es aún más absoluta, en torno al 99%, tanto para el petróleo como para el gas (CE, 2006).

Por otro lado, el Estado en los espacios centrales está dejando de garantizar ya la reproducción social en las metrópolis, quebrándose el pacto histórico capital-trabajo de la época fordista, que se materializó en el «Estado del bienestar» y que tuvo una especial vigencia en los espacios urbanos. Además, la privatización en ascenso de los servicios públicos: agua, educación, salud y pensiones, tendrá una especial incidencia en las metrópolis centrales, debido a la atomización social reinante y a su mayor dependencia de la economía monetaria. Así, amplios sectores de la población serán incapaces de cubrir sus necesidades básicas vía mercado. Ya hay barrios en crisis en Gran Bretaña, p. ej., donde habita la pobla-

ción más afectada por las políticas neoliberales, a la que se le corta la electricidad o el agua por falta de pago. Estas situaciones probablemente se extenderán a sectores más amplios y se generalizarán por todo el Continente, más allá del carácter puntual que tienen hoy en día. Además, se empezará a manifestar (está ocurriendo ya) el fin del ciclo vital de una parte importante del patrimonio edificatorio de baja calidad construido en las últimas décadas[7], que será muy costoso rehabilitar. Se pondrá pues en peligro la reproducción social en las metrópolis. Igualmente, es muy probable que asistamos a una nueva crisis fiscal de los entes locales y regionales (aparte de por supuesto estatales), como en los setenta, debido al fuerte endeudamiento en que han incurrido en estos últimos años; ya que es difícil hacer frente al mismo cuando se encoge bruscamente el crecimiento económico, se eleva de forma sensible el coste del dinero y se disparan los costes de funcionamiento diario de los espacios urbanos. Todo ello acentuará la crisis social y urbana de las metrópolis europeas. En EE.UU. esta crisis está aún más avanzada. Una crisis que se está incubando desde hace años en nuestras sociedades urbanas, ya claramente multiétnicas y multiculturales, y que se está manifestando en forma de estallidos sociales incontrolados en las periferias y guetos metropolitanos, donde habitan los sectores más marginados, precarizados y estigmatizados. Lo sucedido el último otoño en Francia (¡Arde París! y arden las principales ciudades del Hexágono) es muy ilustrativo de los nuevos tiempos en los que entramos.

7. Problemas, p. ej., como los edificios afectados por aluminosis en las metrópolis españolas.

Los límites ecológicos acentuarán y sentenciarán la crisis del modelo actual

Pero la insostenibilidad del presente modelo productivo y territorial se agravará aún más como resultado de la agudización (en marcha) de los desequilibrios ecológicos. De hecho, las últimas catástrofes naturales —el maremoto asiático o los huracanes norteamericanos— han puesto de relieve la vulnerabilidad de las estructuras urbanas y turísticas contemporáneas. Y la creciente escasez de recursos naturales no renovables, los cambios bruscos en los ecosistemas y las catástrofes naturales pueden afectar también a Europa y, por supuesto, al territorio español. Lo están haciendo ya, y estos condicionantes se acentuarán en el futuro. El último informe medioambiental de la Unión, a pesar de su tono edulcorado, así lo atestigua (EEA, 2005). Europa está sufriendo la mayor alteración ambiental de los últimos 8.000 años. Desaparecen los glaciares alpinos y el desierto avanza desde el sur. En este siglo que comienza, se prevé una subida de entre dos y seis grados en la temperatura media, algo mayor que en el resto del mundo. En los últimos cien años «tan sólo» ha subido un grado, y ya estamos viendo sus consecuencias. El mayor incremento de la temperatura se prevé en el Mediterráneo, y en concreto en la Península Ibérica. El sur europeo se volverá más seco, y el norte más húmedo. En las áreas meridionales predominarán los periodos de fuertes sequías, acompañados de lluvias torrenciales, lo que empeorará la erosión, y se producirán fuertes escorrentías puntuales (agravadas por el sellado del territorio) que pueden generar importantes desastres, especialmente en el arco mediterráneo; y en las áreas septentrionales continentales las lluvias intensas pueden provocar vastas inundaciones, con importantes repercusiones económicas y humanas, pues todo el área central europea es la parte más poblada y urbanizada de la Unión. Y el hielo en el Ártico puede llegar a desaparecer durante el verano en el año 2050.

La agricultura se verá fuertemente afectada en todo el sur europeo: menos agua, más evapotranspiración y más plagas, lo que redundará en una aún menor soberanía alimentaria. Y en la Península Ibérica se prevé la desertificación grave de unas tres cuartas partes de su territorio, siendo el riesgo muy alto en el Levante y el sureste. El *stress* (la escasez) de agua será asimismo severo en toda la mitad sur para el año 2030 (ya lo está siendo en la aguda sequía actual), y medio para el resto, salvo en la Cornisa Cantábrica[8]. El riesgo de incremento de incendios por el aumento de las temperaturas y las sequías se intensificará, agudizando la situación ya catastrófica de las últimas décadas. Se estima que se producirá también un considerable aumento del nivel del mar, que puede llegar a ser de un metro en el escenario más desfavorable previsto inicialmente, pero que podría llegar a alcanzar hasta los 13 metros, si es que se produce un abrupto cambio climático si se funden los hielos de Groenlandia y la Antártida (EEA, 2005). El impacto de todo ello en el caso europeo, donde una parte muy importante de su población habita en las áreas costeras, no es preciso subrayarlo. ¿Y qué es lo que podría llegar a pasar con la muralla de cemento de todas nuestras costas en estos escenarios? Además, todo lo expuesto afectará más a las zonas del territorio español donde se está desarrollando fundamentalmente el tsunami urbanizador, haciendo crecientemente inviable dicho modelo territorial. Éstos son «tan sólo» algunos apuntes sacados del informe comunitario, que se basa en datos pasados y en una voluntariosa proyección de las tendencias en curso.

Pero el modelo de crecimiento español ya es profundamente impactante e insostenible desde hace décadas, lo que pasa es que hasta ahora la «sostenibilidad local» se garantiza

8. La escasez y deterioro de los recursos hídricos ya son un enorme problema hoy en día: agotamiento creciente de los recursos hídricos subterráneos, salinización en ascenso de los mismos, eutrofización de muchos de los recursos superficiales (inexistente en países de clima húmedo), etc.

alterando y agotando sus «bienes fondos» (agua, suelo, biodiversidad, etc.), y sobre todo recurriendo cada vez más a importar «sostenibilidad global» —es decir, recursos de todo tipo del resto del mundo, sobre todo de América Latina y África (la deuda ecológica en la que estamos incurriendo desde hace quinientos años, pero sobre todo en el último siglo y especialmente en las últimas décadas)—, al tiempo que mantenemos un fuerte déficit monetario con la UE. El Estado español ha pasado en el siglo XX de tener un uso mayoritario de recursos renovables, a un uso mayoritario de recursos no renovables. Y la entrada en la Unión y en el euro han proporcionado al modelo español un poder de compra sin precedentes sobre el resto del planeta, y nuevos flujos monetarios hacia el Estado español, que han posibilitado (por el momento) todos estos desmanes, al tiempo que desataban desequilibrios e impactos de toda índole. Pero ahora la «cara oculta» de este modelo de desarrollo (de «nuevos ricos») parece que se está vengando, en una especie de *boomerang* incontrolable, y lo puede hacer aún más en el futuro. La «huella ecológica» se ha ampliado hasta extremos insospechados y empieza a pasar factura (Carpintero, 2005). España, como otros países centrales, se ha convertido rápidamente en una economía de adquisición, de expropiación y saqueo a escala global, pero con unos rasgos propios aún más desequilibrados en muchos aspectos.

De esta forma, el modelo productivo y territorial que está dejando a su paso el reciente tsunami urbanizador acentúa aún más la insostenibilidad del «milagro español», lo que se agravará de forma adicional con los planes previstos de cara al futuro, a pesar de que hoy en día todo se nos venda como «desarrollo sostenible». Analicemos tan sólo algunos de los desequilibrios más significativos y apabullantes. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido en los últimos quince años (desde 1990) más de un 50%, cuando lo permitido para España por la UE, de acuerdo con el Protocolo de Kyoto, era que (excepcionalmente) «sólo» se le dejaría

crecer (desde 1990) un 15% hasta los años 2010-2012, a fin de que el conjunto de la Unión pudiera reducir sus emisiones en un 8% para dicho horizonte. El compromiso de la Unión: un objetivo a todas luces insuficiente, según la Comunidad Científica Internacional (IPCC), para tan siquiera controlar el cambio climático. Pues bien, España, uno de los países europeos (y a escala mundial) que más se verá afectado por el cambio climático en marcha, como hemos apuntado, no sólo no cumple con una asignación ya de por sí claramente laxa, sino que siete años antes del horizonte establecido multiplica nada menos que por bastante más de tres el techo asignado (www.nodo50.org/worldwatch).

El indicador de emisiones de CO_2 refleja de forma directa e indirecta muchos de los elementos de insostenibilidad del actual modelo español. No sólo por el creciente consumo de energía a todos los niveles que promueve, proveniente de unos recursos fósiles escasos y sobre todo foráneos, sino porque el incremento de las emisiones relativas al sector transporte en ese periodo han sido aún más acusadas, del orden del 65%. Un dato que indica la progresión salvaje que ha experimentado la movilidad motorizada en todos los medios de transporte, y en especial la viaria y aérea, en España (OSE, 2005). Pues bien, como ya hemos dicho también, el PEIT no sólo pretende inundar de más infraestructuras nuestro ya castigado territorio, lo que disparará aún más el desenfreno motorizado, sino que los megaproyectos infraestructurales previstos (todos ellos, por supuesto, oficialmente «sostenibles»), repercutirán de lleno en la llamada Red Natura 2000 (que agrupa las áreas ZEPA, de protección de aves, y los Lugares de Interés Comunitario —LICs— de la directiva Hábitat, todos ellos de especial protección), afectando a más de trescientos espacios en teoría «intocables» y fomentando una fragmentación adicional del territorio, que tendrá un fuerte impacto sobre la fauna (por el efecto barrera) y la biodiversidad en general; sobre todo, también, por la nueva oleada de lengua de lava urbanizadora que puede suscitar (Segura,

2005). Y es preciso recordar, asimismo, que la biodiversidad existente en nuestro territorio, ya de por sí acosada y amenazada, sufrirá una importante pérdida adicional como resultado del cambio climático en marcha (EEA, 2005).

Pero donde el «desarrollo» que se promueve adquiere un mayor impacto territorial y ambiental actual, y por supuesto inviabilidad futura, es en los dos archipiélagos, por el modelo turístico que se incentiva, que va a más, y porque el existente es ya claramente insostenible. En el caso de Baleares, la «huella ecológica» total del archipiélago, al filo del año 2000, era de casi seis archipiélagos. Es decir, el «milagro balear», un modelo pretendidamente «desmaterializado», pues se basa en el promoción de la «industria limpia» del turismo, necesita importar biocapacidad del resto del mundo correspondiente a una superficie de unas seis veces la extensión de su territorio, habiendo artificializado ya un 5,4% del mismo, uno de los porcentajes más altos del globo. No es para menos. Baleares con un millón ya de habitantes, aproximadamente, recibe, aloja, alimenta y trata los residuos de unos 12 millones de turistas anualmente. Y durante la estación estival la población Balear se duplica, con la carga ambiental que ello supone. Pues bien, las previsiones en marcha (con los planes aprobados) son duplicar adicionalmente el conjunto de la población que gravitará sobre el archipiélago (entre población residente y turística), con lo que el déficit de biocapacidad se multilicaría por más de dos, por el hecho de que habría que importar proporcionalmente aún más del resto del mundo para atender sus demandas (alimentos, materiales, energía, etc.), al quedar sellada una parte todavía mayor de su territorio, perdiendo todavía más capacidad productiva autóctona. En el caso de Canarias observamos un modelo similar, *grosso modo*: un millón de habitantes en un archipiélago que recibe unos 10 millones de turistas, si bien la demanda turística es más plana a lo largo del año, pues no tiene la fuerte estacionalidad del caso balear. Para darnos una idea del impacto que suponen los «milagros balear y canario», recuérdese que en el caso de

Cuba, con una población de unos diez millones de habitantes que recibe en torno a un millón de turistas, ya se considera que el turismo está teniendo una fuerte repercusión ambiental sobre esta perla del Caribe. Pero, además, tanto en el archipiélago balear, como especialmente en el canario, el problema del agua es cada día más agudo y se disparará en el futuro. En el caso de Canarias el modelo turístico y residencial funciona y sobrevive por un rosario cada día mayor de desaladoras que lo mantiene en marcha; en Baleares esta dinámica se ha iniciado más tarde, ante el agotamiento y salinización de los recursos superficiales y acuíferos subterráneos. Pero el problema que se plantea de cara al futuro es que cualquier disrupción (más que posible en situaciones de crisis)[9] de los aprovisionamientos de derivados del petróleo a los archipiélagos puede suponer una crisis de gran magnitud en dichos modelos. Lanzarote, por ejemplo, sólo tendría reservas de agua potable para dos días si el flujo se interrumpe; aparte del creciente coste que supondrá para la población autóctona el agua desalada ante la fuerte subida que está experimentando el precio del petróleo (Murray, 2005; Murray, Rullan, Blázquez, 2005).

El «modelo balear», el primero que se desarrolló en el Estado español y que luego se desparramó por Canarias y la costa mediterránea de la Península, dio lugar a la paulatina consolidación de grandes empresas turísticas (Sol Meliá, Barceló, Iberostar, Riu, Fiesta) que se han situado entre las primeras del mundo de su sector. Es decir, la vía balear de inserción al capitalismo global como «parque temático turístico» ha dado muy buenos resultados al capital de las islas. Éste es pues otro ámbito donde las empresas «españolas», mejor dicho «mallorquinas» (sus sedes están en Palma), están en el

9. En situaciones de graves crisis de abastecimiento, en los escenarios señalados de gran escasez futura, o de posibles crisis internacionales, se intentaría garantizar el abastecimiento primero de la Península y luego de los archipiélagos; en primer lugar, probablemente el balear y, posteriormente, el canario.

top of the pops de su sector. Sol Meliá, p. ej., opera ya en 34 países del mundo (Amer, 2005).

En definitiva, lo que se conoce como «progreso» consiste en la creación de islas de orden aparente, en los espacios centrales, a costa de provocar océanos de desorden cada vez mayor en los territorios periféricos, cuya entropía está ya alcanzando a las propias fortalezas del Centro. Como diría Barry Commoner (1992): «la tecnoesfera (y el capital que la impulsa, añadiríamos) está(n) en guerra con la biosfera». Hemos llegado ya a una situación mundial que cabría definir como de «planeta o mundo lleno», en la que esta guerra se ha vuelto decididamente contra todos nosotros, hasta contra los que habitamos los espacios «privilegiados». A lo largo del siglo XX, hemos pasado de una situación mundial caracterizada por un mar de ruralidad e islotes urbanos, a justo lo contrario a principios del siglo XXI; es decir, a un mar de urbanidad (en especial en Europa) en el que se incrustan islotes naturales en regresión. Es como un proceso cancerígeno sin control, una metástasis que parece (por el momento) imparable y que afecta a la biosfera en su conjunto (Naredo, 2005). La «tercera piel», el ciberespacio y la economía virtual (y muy en concreto la esfera financiera) nos hacen olvidar que dependemos de la «segunda piel» (el espacio construido y el modelo productivo) y especialmente de la «primera» (la biosfera) para mantenernos. Pero antes o después se impondrán también los condicionantes y límites ecológicos a escala global y, por consiguiente, local; y por supuesto, también en nuestro caso, en el que el territorio es además especialmente vulnerable y en donde, en las últimas décadas, hemos estado cada vez más viviendo del resto del mundo.

Si no le ponemos remedio, probablemente ocurrirá lo que señala Carlos Fuentes en una de las citas del inicio de este texto: «La tierra ya no pudo mantener el poder. Cayó el poder. Permaneció la tierra. Permanecieron los hombres sin más poder que el de la tierra». Y entonces nos arrepentiremos, entre otras cosas, de haberle hecho caso a Tony Blair cuando se reía de que el futuro de «Europa» estuviera basado

en la agricultura. Sería bueno no llegar a esa situación por el tremendo coste humano que supondría hacerle frente a posteriori. Deberíamos reaccionar desde ya, y no es nada sencillo, para encaminar nuestro modelo social, productivo, de consumo y territorial hacia escenarios más justos y sostenibles. Nos va la vida en ello, en especial la de las futuras generaciones. Además, si no lo hacemos, el camino hacia el caos, la barbarie y la guerra permanente está muy probablemente garantizado, imponiéndose la ley del más fuerte, en donde sufrirán sin duda los más desfavorecidos y débiles (y en especial las mujeres, niños y ancianos); y esta deriva, sin a lo mejor quererlo directamente, la estamos propiciando también entre todos día a día, si no reaccionamos, aunque por supuesto con distintos grados de responsabilidad.

RECONSTRUIR LA HABITABILIDAD Y LA SOCIEDAD SOBRE EL TERRITORIO

«Los primeros en abandonar los espacios urbanos no fueron los desheredados, que a fin de cuentas tampoco tenían donde ir, sino los ciudadanos más poderosos que, hasta entonces, eran los líderes del modo de vida metropolitano (…) Se puede decir que, en cierta forma, los dueños y señores abandonaron a su suerte las grandes ciudades. Esto supuso el principio del fin (…) Cuando las ciudades —abandonadas por los sectores más ricos y cultos— sufrieron el impacto de las sucesivas ecocrisis del siglo I (después del Error Fatal), se derrumbaron como un castillo de naipes (…) Cuando fallaron los suministros eléctricos, de gas y de agua, el servicio de recogida de basuras, etc., las ciudades se volvieron sencillamente inhabitables. Además, las grandes ciudades costeras, orgullo de la civilización imperial, se inundaron por la subida del nivel de las aguas. A causa de todo ello podemos afirmar que, a finales de la primera centuria después del Error Fatal, no quedaba prácticamente ninguna «gran ciudad» sobre la faz de la Tierra (…) Abandonados por sus gobernantes, los habitantes de las zonas oscuras volvieron a sus antiguas formas de organización y producción, y consiguieron crear economías de subsistencia independientes del flujo global de la economía. Más tarde se produjo el retorno a estas zonas de millones de emigrantes desengañados de la miseria de los bidonville»

Juan Ibarrondo, *Retazos de la red (novela de política-ficción)*

Es preciso, pues, dar un giro profundo en la orientación de nuestro futuro, para gestionar a corto plazo de la mejor forma el declive previsible, después del «subidón» de este último periodo, y para reconducirlo de una manera más equitativa y en equilibrio con el entorno. Lo cual sólo será posible a partir de multitud de procesos moleculares, de pequeña escala, desde abajo, que vayan contra la lógica dominante.

De especial importancia serán aquellos que pretenden frenar (y revertir) el crecimiento urbano, así como rescatar y revitalizar el mundo rural, ante los escenarios de agudas crisis que se vislumbran en el horizonte[1]. Sólo así podremos reducir sensiblemente nuestra huella ecológica, y parar (y regenerar) la degradación ecológica y social en ascenso. Y para que se pueda producir esta nueva vuelta al campo, abordar la cuestión de la propiedad de la tierra y su creciente mercantilización es un tema clave, pues su actual estructura lo impide. Podemos apuntar algunas vías para conseguir este cambio de modelo, aunque no es éste el objetivo principal de este texto, pues es algo que habrá que ir definiendo colectivamente y actuar entre todos en consecuencia. Y para lograrlo todavía no se da una amplia conciencia social, que a lo mejor sólo empieza a surgir después de una crisis profunda. De cualquier forma, sí que podemos esbozar algunos posibles rasgos que deberán tener, estimamos, esos senderos de transformación. Rasgos que serán tanto de deconstrucción como de regeneración de la base material y estructural de nuestra sociedad, y que se deberán llevar a cabo a través de procesos radicalmente democráticos, que hoy ya se apuntan por diversos movimientos sociales. Y esos procesos de deconstrucción y regeneración no se podrán promover sin un cambio paralelo de las estructuras políticas, desde sus niveles más locales, a través de dinámicas sociales verdaderamente participativas. Sólo así podremos caminar hacia modelos más justos, solidarios, en consonancia con el entorno ecológico y antipatriarcales. Pero veamos ya cuáles podrían ser algunos de esos rasgos de deconstrucción y regeneración.

Habrá que parar como sea la lengua de lava urbanizadora y la construcción de nuevas infraestructuras que la promueve, y dejar de sepultar inversión en las metrópolis. Ir eliminando infraestructuras de transporte para atacar la progresión imparable de la movilidad motorizada, pues la naturaleza y el transporte horizontal masivos son enemigos[2]. Reducir nuestro creciente nomadismo, al tiempo que nos enraizamos más sobre el territorio. Relocalizar la economía y crear cercanía, para disminuir las necesidades de transporte motorizado, al tiempo que procuramos una creciente autogestión y control de los procesos productivos. Promover la utilización del transporte colectivo menos costoso, impactante y contaminante (no al AVE, no más metros —ya hay mucho construido—) y, en especial, los medios de transporte no motorizado, en concreto la bicicleta y el caminar. Limitar nuestra dependencia exterior de recursos, restringir el consumo energético fósil y fomentar las energías renovables que promuevan nuestra autonomía. Sanear y reconstruir asimismo los sistemas ambientales y territoriales devastados, creando una nueva geografía. Rearticular lo local de forma integrada con los ecosistemas que lo acogen, para ganar en autosuficiencia. Regenerar, en la medida de lo posible, el inmenso espacio de «no lugares» que se ha creado en los crecimientos metropolitanos periféricos, al tiempo que recuperamos para la habitabilidad el interior y el espacio público de las ciudades. Ayudar a cerrar ciclos naturales de materiales, para reducir el impacto del metabolismo urbano-agro-industrial. Recuperar las huellas territoriales del pasado generadoras de paisaje cultural. Reconectar nuestras formas de conocimiento y cultura con el territorio[3], desde una perspectiva multicultural e intercultural —mestiza— (en la que ya estamos instalados), al tiempo que recreamos nuevas estructuras comunitarias. Redefinir los espacios públicos y privados para el equilibrio de género y,

1. Recordemos que las grandes crisis económicas o bélicas del pasado siglo XX hicieron volver no sólo los ojos, sino también a la población, hacia el medio rural, donde podía asegurarse mejor la subsistencia.

2. El 99% de la biosfera está formada por biomasa fija (Estevan, 2006).

3. La diversidad cultural es una muestra de la adaptación a recursos escasos y al medio.

en paralelo, revalorizar las tareas de cuidados. Y sobre todo rescatar el importante patrimonio agrícola construido durante generaciones en torno a los asentamientos humanos, que se están arrasando y tirando literalmente por la borda. Todas las sociedades antes del capitalismo fueron sociedades campesinas, y las que le sobrevivan también lo serán, aunque no sean iguales a las del pasado. No podrán serlo. Pero, eso sí, habrá mucho que aprender de ellas (Magnaghi, 2003; Amin, 2005; Badal y López, 2006).

En definitiva, se trataría de frenar el crecimiento económico (el gran tabú de nuestro tiempo), que fomenta siempre el crecimiento urbano, e impulsar un decrecimiento controlado, reduciendo poco a poco el ámbito de la economía monetaria, recuperando el control social del dinero[4], sometiendo el mercado a la sociedad, desmantelando los grandes conglomerados empresariales y estableciendo el control del trabajo sobre unos procesos productivos en armonía con el planeta. Es hora ya de abrir un debate en profundidad sobre la imposibilidad física del crecimiento continuo en un mundo finito: la biosfera; y la necesidad de romper con la lógica del beneficio y de la mercantilización y acumulación constante. En suma, se trataría de propiciar (desde abajo) la creación de una pluralidad y diversidad de modelos territoriales e institucionales (más allá —o, mejor dicho, más acá— de la UE y sus Estados) que tengan en cuentan las distintas realidades sociales, culturales y de los entornos naturales y paisajísticos, aún por definir y concretar, que se puedan relacionar en equilibrio y de forma solidaria con muchos otros mundos posibles.

Madrid, abril de 2006

4. Desarrollando monedas locales y sistemas de trueque para reconducir el actual modelo hacia unos parámetros más sustentables. El decrecimiento económico se puede llevar a cabo garantizando al mismo tiempo la producción, el consumo y los servicios necesarios.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA, Federico: «Megaproyectos de infraestructuras: ¿Interés general o negocio privado?». Jornadas de Economía Crítica, Barcelona, marzo de 2006.

ALONSO, José Antonio: «Hablemos del déficit exterior». *El País*, 7-1-06.

AMÍN, Samir: «El dudoso porvenir de las sociedades campesinas». *El Viejo Topo*, abril de 2005.

AMER, Joan: «Turisme i política: L'empresari hoteler a Mallorca». Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2006.

AMORÓS, Miquel: «Conferencia en el Centro Social Anarquista La Revuelta». Zaragoza, marzo de 2005.

ARRIBAS, Carlos: «El urbanismo valenciano: de los límites ambientales a la perversión de lo público». En Badal, Marc y López, Daniel (coordinadores) *Los pies en la tierra. Reflexiones e iniciativas hacia un movimiento agroecológico* (en preparación). Virus, Barcelona, 2006.

AUGÉ, Marc: *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa, Madrid, 1993.

BADAL, Marc y LÓPEZ, Daniel (coordinadores): *Los pies en la tierra. Reflexiones e iniciativas hacia un movimiento agroecológico* (en preparación). Virus, Barcelona, 2006.

BARBERÍA, José Luis: «El regreso al continente americano. Segunda oportunidad histórica». *El País*, 13-14-15 de marzo de 2006.

BARREDA, Andrés: «Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales». Jornadas Las Multinacionales Españolas en América Latina. Paz con Dignidad y Hegoa, Bilbao, 2005.

BECK, Ulrich: «La ciudad del riesgo. Arquitectura en la modernidad reflexiva». *Archipiélago*, n.º 62, 2004.

BIS (Banco Internacional de Pagos de Basilea): «Annual Report». www.bis.org. 2005.

BONET, Jordi: «Barcelona: la reinvención de la ciudad portuaria en la economía global». *Archipiélago*, n.º 62, 2004.

BRENNER, Neil: «La formación de la Ciudad Global y el reescalamiento del espacio del Estado en la Europa Occidental postfordista». http://www.scielo.cl. 2003.

CALVENTE, Juan: «La especulación del territorio, una amenaza a la democracia que se está respondiendo con el surgimiento de un nuevo movimiento social». http://ecologistasenaccion.org. 2006.

CARPINTERO, Óscar: «El metabolismo de la economía española». Economía vs naturaleza (Fundación César Manrique). Madrid, 2005.

CARUANA, Jaime: «Monetary policy, financial stability and asset prices». Papeles ocasionales del Banco de España. http://www.bde.es 2005.
CCDT (Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio): «Comunicado de Prensa de Constitución de la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio». Murcia, abril de 2006.
CE (Comisión Europea): *Libro Verde de la Energía*. CE, Bruselas, 2006.
COMMONER, Barry: *En paz con el planeta*. Ed Crítica, Barcelona, 1992.
DAVIS, Mike: *City of Quartz: Excavating the future of Los Angeles*. Vintage Books, 1992.
—*Control urbano: La ecología del miedo*. Virus, Barcelona, 2001.
—«Planeta de Ciudades-Miseria». *Monthly Review*. www.newleft.net. 2005.
DEL CAZ, Rosario; GIGOSOS, Pablo y SARAVIA, Manuel: «Geografía urbana de la pobreza». *Archipiélago*, n.º 62, 2004.
DEL OLMO, Carolina: «Poco pan y mucho circo: El papel de los macroeventos en la ciudad capitalista». *Archipiélago*, n.º 62, 2004.
DE LA DEHESA, Guillermo: «Los efectos de la burbuja inmobiliaria». *El País*, 20-11-04.
DELGADO, Manuel: «Los restos del mañana» (comentarios sobre la Ciudad de Cuarzo). *Archipiélago*, n.º 62, 2004.
DÍAZ ORUETA, Fernando: «Mercado inmobiliario y segregación urbana en el litoral levantino». Jornadas de Economía Crítica, Barcelona, marzo de 2006.
EEA (European Environment Agency): «The european environment state and oultlook». European Environment Agency, Dinamarca, 2005.
ESTEVAN, Antonio y SANZ, Alfonso: *Hacia la reconversión ecológica del transporte en España*. La Catarata, Madrid, 1996.
ESTEVAN, Antonio: «La enfermedad del transporte». *Libre Pensamiento*, n.º 48, 2005.
—«Notas (internas) en torno al urbanismo mafioso». Inédito. Ondára, diciembre de 2005.
ESTEVEZ, Xerardo: «Tierra prometida, tierra quemada». *El País*, 5-2-06.
ESPON (European Spatial Planning Observation Network): «Espon in progress. Preliminary results by autumn 2003». http://www.espon.lu
FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: *La explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la crisis global*. Ed. Fundamentos, Madrid, 1993-1996 (tercera edición).
—«Globalización, territorio y población». En Naredo, José Manuel y Parra, Fernando: «Situación diferencial de los recursos naturales en España». Economía vs Naturaleza. Madrid, 2002.
—«Destrucción global versus regeneración local». En López, Daniel y López, Ángel: *Con la comida no se juega*. Traficantes de Sueños, Madrid, 2003.

—«Marte versus Venus, o dólar versus euro». Madrid, 2004. http://nodo50.org
—«¿Construyendo Europa *manu militari*?». http://www.rebelion.org, http://www.ecologistasenaccion.org. 2006.
FMI (Fondo Monetario Internacional): «Perspectivas económicas mundiales» (Informe de primavera). www.fmi.org
FORCADELL: «Informe Inmobiliario. Actualidad y perspectivas». Universidad de Barcelona. Barcelona, 2006.
GARCÍA BELLIDO, Javier: «Por una urbanización del paradigma urbanístico español: el tsunami urbanístico que arrasará el territorio». En *Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales*, XXXVII (144). 2005.
HARVEY, David: *El nuevo imperialismo*. Akal (colección Cuestiones de Antagonismo), Madrid, 2004.
IBARRONDO, Juan: *Retazos de la red*. Bassarai (Narrativa), Vitoria-Gasteiz, 2005.
MAGNAGHI, Alberto: *Le Project Local*. Mardaga, Bruselas, 2003.
MALO DE MOLINA, José Luis: «Una larga fase de expansión de la economía española». Papeles Ocasionales del Banco de España. http://www.bde.es. 2005.
MURRAY, Iván: «Huellas en las playas de s'Arenal. La huella del impacto humano sobre la Tierra y en las Islas Baleares». Segundas Jornadas Sociedad y Medio Ambiente. Universidad de Salamanca, noviembre de 2005.
MURRAY, Iván; RULLAN, Onofre, y BLÁZQUEZ, Macià: «Las huellas territoriales del deterioro ecológico. El trasfondo oculto de la explosión turística de Baleares». *Revista electrónica Neocrítica*. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-199.html. 2005.
NAREDO, José Manuel: «La especie humana como patología terrestre». http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/ajnar.html. 2004.
—«Mitos inmobiliarios de nuestro tiempo». *El Ecologista*, n.º 46, invierno 2005/2006.
—«Metabolismo económico y deterioro territorial. Tendencias en curso y posibles remedios». En Badal, Marc y López, Daniel (coordinadores) *Los pies en la tierra. Reflexiones e iniciativas hacia un movimiento agroecológico* (en preparación). Virus, Barcelona, 2006.
—«Economía, poder y megaproyectos». Jornadas de Economía Critica, Barcelona, marzo de 2006.
ORDIGUER, Andreu: «Más allá, o más acá, de la especulación. Unas anotaciones alrededor de la vivienda». Inédito. Barcelona, 2005.
OSE (Observatorio de la Sostenibilidad de España): «Informe sobre la Sostenibilidad en España». Mundiprensa. Madrid, 2005.
PARKER, George: «Europe simulates financial meltdown». *Financial Times*, 9-4-2006.

RECIO, Albert: «Barcelona en la liga mundial. Infraestructuras, eventos y renovación urbana». Jornadas de Economía Crítica, Barcelona, marzo de 2006.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Julio: «La vivienda en España. Los ciclos largos y las estadísticas». *El País*, 2-11-05.
SASSEN, Saskia: «La ciudad, esencial para afrontar el desafío ecológico». Segundas Jornadas sobre Sostenibilidad. IAU+S. Escuela de Arquitectura de Madrid, febrero-marzo de 2006.
SEGURA, Paco: «El PEIT: Echando gasolina al fuego». *Ecologista*, n.º 43, primavera de 2005.
UTE (Unió Temporal d'Escribes): *Barcelona marca registrada, un model per desarmar*. Virus, Barcelona, 2004.